

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

15ª REUNION — Continuación de la 4ª SESION ORDINARIA —
JUNIO 21 DE 1995

Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri
y Carlos Alberto Romero

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

DIPUTADOS PRESENTES:

ABASTO, Angel Leónidas
ABIHAGGLE, Carlos Enrique
ACENOLAZA, Florencio Gilberto
ADAIME, Felipe Teófilo
ALBAMONTE, Alberto Gustavo
ALBERTI, Juan Carlos
ALCALA, Néstor Ricardo
ALENDE, Oscar Eduardo
ALGABA, Ernesto Pedro Andrés
ALSOGARAY, Alvaro Carlos
ALVAREZ, Carlos Alberto
ALVAREZ, Carlos Raúl
ALVAREZ, ECHAGÜE, Raúl Angel
ALVAREZ GARCÍA, Normando M.
ANTELO, José María
ARAGONES de JUÁREZ, Mercedes
ARIAS, César
ARMENDARIZ, Alejandro
AYALA, Susana Beatriz
BALESTRA, René Helvecio
BALESTRINI, Alberto Edgardo
BALESTRINI, Miguel Alberto
BALTER, Carlos Mario
BARBERÁ, Eliseo
BARBOTTI, Atilio Ector
BAUM, Daniel
BECERRA, Carlos Armando
BECERRA, Nicolás Eduardo
BENZI, María Cristina
BERHONGARAY, Antonio Tomás
BERMUDEZ, María del Pilar
BIANCHI SILVESTRE, Marcela
BISCHOF, Enrique Alberto
BONINO, Miguel Ángel
BONOMI, Silvia Mónica
BORDA, Osvaldo
BRACCHI, Osvaldo Américo
BRESER, Adalberto Edgardo
BRUNELLI, Naldo Raúl A.
BRUNZO, Omar Obdulio
BULLRICH, Patricia
CALLABA, Anibal
CAMANO, Eduardo Oscar
CARCA, Elisa Beatriz
CASARI de ALARCA, Leonor
CASTILLO, José Luis
CASTRO, Carlos José
CEBALLOS, Walter Alberto

CLOSS, Ramón Alberto
CORCHUELO BLASCO, José M.
CROSTELLI, Juan Carlos
D'ALESSANDRO, Miguel
DAUD, Jorge Carlos
DELIA, Roberto Antonio
DEL FABRO, Lilián
DÍAZ MARTÍNEZ, Jorge Raúl
DI TULLIO, Héctor Horacio
DONNI, Luisa Cristina
DRISALDI, María Rita
DUMÓN, José Gabriel
DURANONA y VEDIA, Francisco d.
DURRIEU, Marcela Margarita
ESTÉVEZ BOERO, Guillermo E.
FABRISIN, Carlos Alberto
FAYAD, Víctor Manuel
FELGUERAS, Ricardo Ernesto
FERNÁNDEZ GILL, Guillermo
FERNÁNDEZ MEIJIDE, Graciela
FIGUEROA, Pedro Octavio
FLORES, Rafael Horacio
FRAGOSO, Francisco Ulises
FUNES, Carlos Deleito
GALANTE, Pedro Jorge
GALVÁN, Raúl Alfredo
GALLO, Orlando Juan
GARAY, Nicolás Alfredo
GARCÍA MORENO, Miguel Ángel
GAUNA, Juan Octavio
GAZIA, Rodolfo Mauriello
GIMÉNEZ, Delfor Abel
GIMÉNEZ, Ramón Francisco
GIOJA, José Luis
GOLPE, Carlos Horacio
GOLPE, Néstor Lino
GÓMEZ CENTURIÓN, Carlos E.
GONZÁLEZ, Antonio Erman
GONZÁLEZ CABAÑAS, Tomás W.
GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan H.
GRANADOS, Dulce
GREEN, Gustavo Adolfo
GUZMÁN, María Cristina
HARDY, Anibal Osvaldo
HERNÁNDEZ, Antonio María
HERRERA ARIAS, Manuel H.
HUMADA, Raúl
IBARBIA, José María
IBARRACHE, Julio César
JAUNARENA, José Horacio

JUNCOSA, Rodolfo Aldo
KAHLER, Ernesto Rolando
KAMMERATH, Germán Luis
KELLY, Elsa Diana Rosa
KESSLER, Ana Raquel
LANOZ, José Fernando
LAMBERTO, Oscar Santiago
LARRABURU, Dámaso
LECONTE, Ricardo Guillermo
LEGUIZAMÓN, María Laura
LÓPEZ, Alcides Humberto
LÓPEZ, José Augusto
LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
LYNCH, Carlos Alberto
LLOPIS, Enrique Raúl
MACHADO, Oscar Alfredo
MAIDANA, Elsa Ignacia
MANFREDOTTI, Carlos
MAQUEDA, Juan Carlos
MARCOS, Ricardo Ernesto
MARTÍNEZ, Manuel Luis
MARTÍNEZ, Silvia Virginia
MARTÍNEZ GARDINO, Emilio R.
MATHIOV, Enrique José
MATTEKIN, Jorge Rubén
MENDOZA, Martín
MERCADER, Martha Evelyn
MERCADO LUNA, Ricardo Gastón
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MIRALLES de ROMERO, Norma
MOLARDO, Eivio Francisco
MOLINAS, Ricardo Francisco
MONTEIL, Sergio Alberto
MOREAU, Leopoldo Raúl
MORENO, Emilio Pedro
MULLER, Mabel Hilda
MUNACURRIA, Marcelo Julio
MUSOZ, Marcelo Bernardo
NACUL, Miguel Camiel
NEGRI, Mario Raúl
NIEVA, Alejandro Mario
NINO, Jorge
NOVAU, Pedro José
ORGAZ, Carlos Alfredo
ORTIZ MALDONADO, Gastón H.
PARADY, Alberto
PAROLA, José María
PASQUAL, Rafael Manuel
PELAEZ, Víctor
PEPE, Lorenzo Antonio

PERALTA, Aníbal Pedro
 PEREZ, Jorge Telmo
 PERNASSETTI, Horacio F.
 PEIGUINI, Giacomina Eulalia
 PESCE, Félix
 PICCINI, Ana Ida
 PICCHETTO, Miguel Ángel
 PIERRI, Alberto Reinaldo
 PINTO, Guillermo
 POLINO, Héctor Teodoro
 POLO, Luis Nicolás
 PRAT, Alfredo Ernesto
 RE, Ricardo Horacio
 RICO, Aldo
 RODRIGUEZ, Jesús
 RODRIGUEZ, Mabel F.
 RODRIGUEZ SANUDO, Hugo B.
 ROGGERO, Humberto Jesús
 ROIG, Angel
 ROJO, Rubén Darío
 ROMERO, Carlos Alberto
 ROMERO, Humberto Antonio
 RUBINI, Mirta Elsa
 RUIZ PALACIOS, José David
 SALINO, María Antonia
 SAMPIEURO, Darcí
 SARQUIZ, José Alberto
 SCELZI, Carlos José
 SEBASTIANI, Claudio A.
 SOBRINO, Margarita María
 SORIA, Carlos Ernesto
 SPINOSA, Augusto Juan
 SUCARIA, Nefef
 SUERO, Carlos Adolfo
 TENEV, Carlos
 TEODOSIU, Jorge Nicolás
 TERRAGNO, Rodolfo Héctor
 TOLOMBO, Leonor Ester
 TOMA, Miguel Ángel
 TOPO, Francisco Patricia
 TRETTEL MEYER, Raúl

TROYANO, Silvia Elena
 VALCARCEL, Juan Manuel
 VARELA, Néstor Ángel
 VARELA CID, Eduardo
 VENESIA, Gualberto Edgardo
 VICCHI, Raúl Horacio
 VIGLIONE, Adolfo Oscar
 ZICARELLI, Orlando A.
 ZUCCARDI, María Cristina

AUSENTES, CON LICENCIA:

SANCHEZ GALDEANO, Roque
 SCHIARETTI, Juan
 TOPA, Raúl Roque

AUSENTES, CON SOLICITUD DE LICENCIA PENDIENTE DE APROBACION DE LA HONORABLE CAMARA:

BARRIONUEVO, Eduardo E.
 BRANDA, Carlos Ernesto
 D'AMBRÓSIO, Ángel Mario
 DIGÓN, Roberto Secundino
 FALLETTI, Julio César José
 FOLLONI, Jorge Oscar
 ITURRE, E. del Valle
 LAFALLA, Arturo Pedro
 LOSADA, Luis Enrique
 MACEDO, Horacio Antonio
 MENEM, Carlos Omar
 MICHELLI, Marco Aurelio
 ROY, Irma
 SAADI, Ramón Eduardo
 SMITH, Santos
 SOLANAS, Fernando E.
 ZAVALA, José Luis

AUSENTES, CON AVISO:

ACHEM, Antonio
 ARANDA, Salomón Dantti
 ARGUELLO, Jorge Martín Arturo
 ARRUCEA, José Salvador
 AYETZ, Liliana
 BENEDETTI, Jorge Enrique
 BRAVO, Alfredo Pedro
 BUSSI, Antonio Domingo
 CABIRON, Juan Carlos
 CAMARA, Mario Ángel
 CAMPERO, Rodolfo Martín
 CASTILLO, Oscar Aníbal
 CERDEIRA, Rogelio Rafael
 DELLEPIANE, Carlos Francisco
 GUERRERO, Luis Serafin
 HERRERA, Bernardo Eligio
 KOTH, Carlos
 MARCOLLI, Juan Miguel A.
 MARTINEZ, Esteban
 MENDOZA, Claudio Ramiro
 MENECHINI, Javier Reynaldo
 MICHETTE, Salomón Antonio
 MURIEL, Néstor Jorge
 NATALE, Alberto Adolfo
 NEDER, Jorge Humberto
 OLIVERA, Enrique José
 ORQUIN, Leopoldo Manuel
 PARAJON, José María
 PATTERSON, Ricardo Ansel
 PELLIN, Osvaldo Francisco
 RODRIGO, Esteban Joaquín
 RODRIGUEZ, José
 SANTIN, Eduardo
 STORANI, Federico
 TOGNI de VELY, Adriana
 USANDIZAGA, Horacio Daniel
 VÁZQUEZ, Roberto
 VÁZQUEZ, Silvia Beatriz
 VITAR, José Alberto

- La referencia acerca del distrito, bloque y período del mandato de cada señor diputado puede consultarse en el Diario de Sesiones correspondiente a la 1ª sesión ordinaria (Anexo 4ª reunión), de fecha 8 y 9 de marzo de 1995.

SUMARIO

- Indicación del señor diputado Matzkin a fin de que la Presidencia comunique a la Comisión de Finanzas que debe concurrir la reunión que está realizando. (Pág. 1645.)
- Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre riesgos del trabajo (59-P.E.-94). (Pág. 1645.)
- Moción de orden formulada por el señor diputado Pepe de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de tratar sobre tablas el asunto al que se refiere el número 9 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 1647.)
- Moción del señor diputado Pepe de que se trate sobre tablas el asunto al que se refiere el número 9 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 1647.)
- Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 2 de este sumario. Se sanciona con modificaciones. (Pág. 1649.)
- Moción de orden formulada por el señor diputado López Arias de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento y moción de tratamiento sobre tablas del asunto al que se refiere el número 7 de este sumario. Se aprueban ambas proposiciones. (Pág. 1687.)
- Consideración del proyecto de resolución del señor diputado Algaba y otros por el que se aprueba lo actuado por la Secretaría Administrativa de la Honorable Cámara en relación con el pedido, formulado por la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, de incorporación de los servicios administrativos financieros de la Honorable Cámara al Sistema de Cuenta Única del Tesoro (2408-D.-95). Se sanciona. (Pág. 1687.)
- Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se lo faculta a modificar diversas leyes impositivas a fin de establecer un arancel común en el marco del Mercosur (82-P.E.-94). Se sanciona con modificaciones. (Página 1688.)
- Consideración del proyecto de resolución del señor diputado Pepe (2336-D.-95) y de los proyectos de

declaración de los señores diputados Valcarcel (2.056-D.-95), Bultrich y otros (2.187-D.-95) y Armendáriz y Negri (2.363-D.-95) sobre apoyo al gobierno, al Parlamento y al pueblo chilenos ante las circunstancias por las que atraviesan las instituciones democráticas del país. Se sanciona un proyecto de resolución que unifica dichas iniciativas. (Pág. 1691.)

10. Consideración de los proyectos de resolución de los señores diputados Brunelli (1.769-D.-95) y Careca y otros (2.192-D.-95) por los cuales se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre la situación de la Central Técnica de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Se sanciona un proyecto de resolución que unifica ambas iniciativas. (Página 1691.)

11. Consideración del proyecto de ley del señor diputado Martínez (M. L.) por el que se transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Morón un inmueble de propiedad del Estado nacional ubicado en Castelar, provincia de Buenos Aires, para sustitución de un cementerio parque modelo (1.684-D.-95). Se sanciona. (Pág. 1695.)

12. Consideración de los proyectos de resolución del señor diputado Fayad por los que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre la nube tóxica que afectó a la población del Gran Mendoza (1.950-D.-95). Se sanciona. (Pág. 1697.)

13. Moción de orden formulada por el señor diputado Manfredotti de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de solicitar el tratamiento de un proyecto de ley de su autoría por el cual se establece un mínimo no imponible adicional para las personas físicas y sucesiones indivisas domiciliadas en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (2.105-D.-95). No se vota por falta de quórum. (Pág. 1698.)

14. Apéndice:

A. Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. 1699.)

B. Asuntos entrados:

— Proyectos de resolución. (Pág. 1712.)

— Proyectos de declaración. (Pág. 1712.)

C. Inserción solicitada por el señor diputado Martínez (M. L.). (Pág. 1712.)

— En Buenos Aires, a los veintidós días del mes de junio de 1995, a la hora 17 y 18:

1

INDICACION

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa la sesión.

Sr. Matzkin. — Pido la palabra para una indicación.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una indicación tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: tengo entendido que está sesionando la Comisión de Finanzas. Puesto que reglamentariamente ello no puede ser, pedimos a la Presidencia que instruya a la comisión en el sentido de interrumpir esa reunión a fin de que todos los señores diputados que la integran puedan participar de la sesión plenaria.

Sr. Presidente (Pierri). — Nos comunicaremos a ese efecto con la comisión, señor diputado.

2

RIESGOS DEL TRABAJO

(Continuación)

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa la consideración en particular del dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de regulación de la prevención de los riesgos y de la reparación de los daños derivados del trabajo (expediente 59-P.E.-94), a partir del capítulo IV (artículos 11 a 19).¹

Sr. Matzkin. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: quisiéramos plantear una moción de reconsideración con respecto al artículo 2º, que ya fue votado, y que se refiere al ámbito de aplicación. En el punto 2 del artículo se establece que el Poder Ejecutivo deberá incluir en el ámbito de la ley una serie de trabajadores. Planteamos la reconsideración a efectos de volver a la redacción original, que decía que el Poder Ejecutivo podrá incluir en el ámbito de aplicación a tales trabajadores. Hemos consultado a la comisión y no tiene objeción con respecto a esta modificación.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — Señor presidente: la bancada radical está totalmente de acuerdo con la reconsideración porque evidentemente se deslizó un problema de interpretación, al modificarse el texto con un contenido imperativo. Tenemos que dejar abierta la posibilidad para que se efectúen todas las modificaciones necesarias con referencia a los trabajadores domésticos autónomos

¹ Véase el texto del dictamen en el Diario de Sesiones del 14 de junio de 1995, página 1393.

y otros. Estas situaciones tienen que regularse por una ley especial.

Pero, ya que estamos en tren de reconsiderar algunos artículos votados, pediríamos que se traten otros detalles que quedaron pendientes de análisis.

Ya cuando se trató en general este proyecto aludimos al inciso a) del artículo 2º, que se refiere a los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y sus municipios y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Durante la consideración en particular se aprobó la redacción tal cual figuraba en el dictamen.

Solicitamos que se excluya de este inciso a las provincias y los municipios por una cuestión de lógica constitucional, ya que de lo contrario estaríamos violando uno de los principios del sistema federal. Se trata de facultades exclusivas de los Estados provinciales, que deben ser reguladas por medio de sus Legislaturas. A lo sumo, el proyecto podría invitar a las provincias y municipios a adherir a este sistema. En el caso de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires también habrá problemas cuando se legisle acerca de su autonomía, porque en este sentido quedará en la misma situación que las provincias.

Además, en tanto esperamos que se conforme el quórum, me permitirá instalar en el debate otro cuestionamiento para que vaya siendo analizado por el miembro informante, adhiriendo a la moción de reconsideración de algunos artículos formulada por el señor diputado Matzkin. En este caso me refiero al apartado 2 del artículo 6º, en el que se señala: "Se consideran enfermedades profesionales aquellas causadas por las tareas cumplidas por el trabajador o por las condiciones medioambientales del trabajo y que se encuentren incluidas en el listado de enfermedades profesionales que confeccionará y revisará anualmente el Poder Ejecutivo nacional."

"Las enfermedades no incluidas en dicho listado así como sus consecuencias, en ningún caso serán consideradas laborales."

De esta manera se puede producir una injusticia ya que al hacer una enunciación taxativa se cierra la posibilidad de considerar algunos casos puntuales que pueden aparecer, de enfermedades que podrían considerarse laborales pero que al no estar incluidas en el listado derivarían en reclamos conflictivos. Para que esto no ocurra sugerimos reparar esta situación suprimiendo...

Sr. Presidente (Pierri). — Señor diputado: me acaban de informar que el tema que está usted incorporando no fue consensuado en la comisión.

No podemos volver a considerar asuntos que ya fueron debatidos; sólo analizaremos lo consensuado con la comisión.

Sr. Novau. — Señor presidente: durante el día de ayer mantuvimos reuniones altamente positivas en las que aplicamos una mecánica para dejar abiertos canales que permitieran mejorar esta norma.

Durante la discusión en general ya hemos señalado que no compartimos la filosofía de este proyecto. Si bien no estamos de acuerdo con el sistema propuesto, lo hemos leído y estudiado profundamente y por ello queremos hacer algunas sugerencias, teniendo en cuenta los hechos políticos que se plantean en este nuevo régimen de accidentes de trabajo, para corregir algún tipo de desviaciones y circunstancias que se pueden producir y que posiblemente generen problemas en el futuro.

Assumimos esta actitud a modo de aporte, para que sea analizado con madurez y obtener así la mejor norma posible. Todas las leyes son perfectibles. Si nos damos el tiempo necesario y permitimos un debate en este tono, podremos consensuar elementos importantes y mejorar en definitiva el proyecto.

Sr. Presidente (Pierri). — Señor diputado: le sugiero que mientras esperamos que se conforme el quórum trate de acordar estas cuestiones con los integrantes de la comisión. Tenga en cuenta que el tema ha sido largamente debatido. Si dicho acuerdo no se logra, creo que estamos perdiendo el tiempo.

Sr. Novau. — No son muchos los temas que he abordado, sólo algunas cuestiones puntuales.

Sr. Presidente (Pierri). — Sólo podemos habilitar la consideración del planteo que usted formula si se aprueba la moción de reconsideración; de lo contrario estaríamos perdiendo tiempo.

Se va a votar la moción de reconsideración del artículo 2º, formulada por el señor diputado Matzkin. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.

—Resultado afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — A todo lo que apunté sobre el artículo 2º, agregó la reconsideración del apartado 2 del artículo 6º. Propongo suprimir su último párrafo, que dice: "Las enfermedades no incluidas en dicho listado así como sus consecuencias, en ningún caso serán consideradas laborales", a fin de reemplazarlo por el si-

guiente texto: "Quedará a cargo del trabajador probar que las enfermedades no incluidas en dicho listado tienen carácter profesional."

En este modo no cerramos al trabajador la posibilidad de cobertura fuera del listado de enfermedades, cuando ellas puedan ser plenamente comprobadas. Con la modificación propuesta estamos tratando de reparar algún tipo de inequidad que se pueda producir en el futuro y que hoy no tenemos presente en la discusión.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia desea saber si este planteo se refiere al artículo 2º.

Sr. Novau. — No; corresponde al artículo 6º. En todo caso, después solicitaré la reconsideración de dicho artículo.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿La comisión acepta la modificación propuesta por el señor diputado Matzkin respecto del apartado 2º?

Sr. Sueiro. — Sí, señor presidente.

Sr. Novau. — Quisiera saber si el miembro informante aceptará la reconsideración que he propuesto para el artículo 2º.

Sr. Presidente (Pierri). — Primero se tratará la propuesta del señor diputado Matzkin y después la suya.

Se va a votar el artículo 2º con la modificación aceptada por la comisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia desea saber si la comisión acepta la propuesta del señor diputado Novau.

Sr. Borda. — No hemos entendido bien cuál es su proposición.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — Mi propuesta consiste en reemplazar el inciso a) del punto 1 del artículo 2º, que dice: "Los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y sus municipios y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", por el siguiente texto: "Se invita a las provincias a adherir a esta ley."

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro. — No me queda en claro lo siguiente. Se solicitó una reconsideración del artículo 2º, que hemos votado. Ahora supuestamente tenemos que volver a tratar, según tengo entendido, otra reconsideración del artículo 2º.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿La comisión está de acuerdo en que se reconsidere nuevamente el artículo 2º?

Sr. Sueiro. — No, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — En consecuencia, la reconsideración no resulta procedente.

Corresponde pasar a la consideración del capítulo IV, que comprende los artículos 11 a 19.

3

MOCION DE ORDEN

Sr. Pepe. — Pido la palabra para formular una moción de orden.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Pepe. — Señor presidente: en estos últimos días el continente americano se ha visto sacudido por las circunstancias particulares por las que atraviesa el pueblo chileno. Nosotros hemos presentado un proyecto de resolución en el que dejamos claramente determinado que no pretendemos intervenir en los asuntos internos de este país al que tanto queremos y respetamos. De todos modos creemos que la Cámara no puede estar ajena al hecho de brindar un apoyo explícito y taxativo al sistema institucional democrático de la república hermana de Chile.

Por lo dicho solicito que la Cámara se aparte de las prescripciones reglamentarias a efectos de tratar sobre tablas el proyecto al que acabo de hacer alusión.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración la moción formulada por el señor diputado por Buenos Aires en el sentido que la Cámara se aparte de las prescripciones reglamentarias.

Se va a votar. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda aprobada la moción.

4

MOCION DE SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor diputado por Buenos Aires.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Pepe. — Señor presidente: el proyecto en cuestión — que está en manos de la Secretaría — dice textualmente: "La hermana República de Chile está atravesando en estos momentos una situación institucional que alarma

a la comunidad internacional en general, a Latinoamérica en particular, y a la Argentina por los lazos que nos unen con el pueblo y el gobierno chileno.

"Deseamos dejar perfectamente en claro que este hecho, que pretendemos sea acompañado por el Parlamento argentino, no tiene de ninguna manera la intención de entrometerse en los temas soberanos o internos de ese país al que tanto respetamos. Nuestro objetivo es defender..."

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia hace notar que lo que está leyendo el señor diputado por Buenos Aires está contenido en los fundamentos de la iniciativa. Esta Presidencia se permite sugerir al legislador que vaya directamente a la parte resolutive.

Sr. Pepe. — Con todo gusto, señor presidente. El proyecto dice así: "La Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve: hacer llegar al gobierno, al Parlamento y al pueblo chileno el apoyo decidido de esta Honorable Cámara de Diputados, en estas difíciles circunstancias por las que atraviesan sus instituciones democráticas".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Armendáriz. — Señor presidente: en el mismo sentido que acaba de señalar el señor diputado Pepe, aclaro que en el día de la fecha he presentado una iniciativa que desde hace instantes se encuentra en manos de la Secretaría registrada bajo el número de expediente 3.363-D.-95, referida a la situación imperante en la República hermana de Chile, que nos preocupa sobremanera.

Concluido el proceso que se originó por el asesinato del canceller Orlando Letelier y dictada la sentencia de la Corte Suprema de ese país por la que se condena a seis y siete años de prisión respectivamente a los responsables de dicho asesinato, es indudable que se produjeron manifestaciones y diversas expresiones que sin duda perturbaron la opinión pública de todo el continente.

Existen algunos hechos fundamentales. En primer lugar, las bravuconadas del general Contreras, quien desde un principio señaló que no aceptaría el fallo de la Corte y que se resistiría a ser conducido a la cárcel...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Armendáriz. — De cualquier manera, señor presidente, todos estos episodios han perturbado a Latinoamérica. Debo señalar que, a través de

algunas expresiones, está resurgiendo una mentalidad retrógrada que tuvo prevalencia en América latina durante la década del 70, que provocó el derrocamiento de gobiernos constitucionales en distintos países, entre ellos la Argentina.

Solicito que al proyecto del señor diputado Pepe se sume la iniciativa que he presentado —cuyas características son similares a las de aquél—, expresando así nuestra solidaridad con la Cámara de Diputados y el pueblo chilenos y haciendo votos para que lo más pronto posible se vuelva a la normalidad absoluta en ese país.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: en principio habíamos acordado la consideración de este tema, pero no dentro de otra moción de orden como la que se ha formulado. Ahora vemos que hay más de un proyecto sobre el mismo asunto, incluso de nuestro bloque.

En consecuencia, propongo que adoptemos el criterio utilizado en otras oportunidades frente a hechos similares: continuemos con el tratamiento de la cuestión de fondo que nos ha convocado mientras los autores de los distintos proyectos presentados unifican criterios en torno de una sola iniciativa, a efectos de ser considerada a posteriori.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia está de acuerdo con el procedimiento sugerido por el señor diputado por La Pampa, y el señor diputado Galván también nos está manifestando su conformidad al respecto.

Mientras se busca consenso para arribar a un solo texto...

Sr. Pepe. — ¡No acepto, señor presidente, porque lo que se va a votar no será mi proyecto! Deseo que se ponga a votación la moción que he formulado a fin de que se considere mi iniciativa, y luego con mucho gusto levantaré ambas manos para que el proyecto presentado por el señor diputado Armendáriz sea sancionado.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor diputado Pepe.

Sr. Matzkin. — ¡No es eso lo que hemos propuesto!

Sr. Presidente (Pierri). — Señor diputado Matzkin: la Presidencia sabe de qué forma debe procederse en relación con la moción formulada. La Cámara ya ha hecho lugar al pedido de apartamiento del reglamento. A continuación se va a poner a votación la moción de tratamiento sobre tablas y luego —si ésta fuere aprobada— se considerará el proyecto.

Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor diputado Pepe. ¿Está claro, señor diputado Matzkin?

Sr. Matzkin. — Sí, señor presidente; pero, luego de que se haya votado la moción de tratamiento sobre tablas, vamos a proponer que se posponga la consideración del asunto hasta que se unifiquen los distintos proyectos. Este es el procedimiento que ha adoptado la Cámara frente a la presentación de iniciativas cuyo objetivo es el mismo; el cuerpo está en condiciones de votar en forma unánime sobre un mismo tema. No tiene sentido que la Cámara vote más de un proyecto sobre una misma cuestión cuando existe la voluntad política de unificar las distintas iniciativas sobre la base de un objetivo compartido, cual es en este caso señalar la preocupación de un poder del Estado sin inmiscuirse en los derechos de otro Estado. Esto es totalmente razonable; además, es la forma en que hemos procedido siempre con el ánimo de que la Cámara continúe trabajando en torno del asunto para el cual fue citada.

Sr. Pepe. — ¿Es posible que por Secretaría se informe acerca de la cantidad de proyectos presentados?

Sr. Presidente (Pierri). — Sí, señor presidente.

Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor diputado Pepe. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda incluida la consideración del asunto en el orden del día de esta sesión. Mientras averiguamos cuántos son los proyectos presentados — luego tomaremos una decisión acerca de si los votamos unificadamente o si consideraremos separadamente el proyecto del señor diputado Pepe —, continuaremos con el tratamiento en particular del proyecto de ley sobre riesgos del trabajo.

5

RIESGOS DEL TRABAJO

(Continuación)

Sr. Presidente (Pierri). — Prosigue la consideración en particular del dictamen en el proyecto de ley para la regulación de la prevención de los riesgos y de la reparación de los daños derivados del trabajo (expediente 50-P.E.-94).

Sr. Novau. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — Formulo moción de reconsideración del artículo 6º, que ya fue votado en la reunión del miércoles pasado. Proponemos que respecto del último párrafo del inciso 2 del mencionado artículo, que dice: "Las enfermedades no incluidas en dicho listado, como sus consecuencias, en ningún caso serán consideradas laborales", se lo sustituya por el siguiente: "Quedará a cargo del trabajador probar que las enfermedades no incluidas en dicho listado tienen carácter profesional."

De este modo damos la oportunidad a los trabajadores para que por medio de las pruebas y los peritajes pertinentes logren que sea considerado algún tipo de enfermedad que no figura en ese listado.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración la moción de reconsideración formulada por el señor diputado por Buenos Aires. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.

— Resulta negativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda rechazada la moción.

En consideración el capítulo IV, que comprende los artículos 11 a 19.

Sr. Pernasetti. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: todavía no han sido votados los artículos 7º y subsiguientes...

Sr. Presidente (Pierri). — No es así, señor diputado; ya fue aprobado el capítulo III, que comprende los artículos 6º a 10.

Sr. Pernasetti. — Según consta en la versión taquigráfica se pasó a cuarto intermedio antes de votar el artículo 7º.

Sr. Presidente (Pierri). — No, señor diputado. La Presidencia invitó al cuerpo a pasar a cuarto intermedio luego de votar el capítulo III; justamente solicitó a los señores legisladores que permanecieran en el recinto para poder votar ese capítulo, con el compromiso de que luego se pasara a cuarto intermedio hasta hoy.

Sr. Pernasetti. — La versión taquigráfica de esa reunión dice así: "Con la modificación propuesta y aceptada por la comisión se va a votar el capítulo III, que comprende los artículos 6º a 10". Luego el señor presidente anunció: "En uso de las facultades que confiere a esta Presidencia..."

Sr. Presidente (Pierri). — Antes de que la Presidencia invitara a la Cámara a pasar a cuarto intermedio se aprobó el capítulo III.

Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. López (A. H.). — Señor presidente: teniendo entonces por cierto que el capítulo III ya fue aprobado, quisiera recordar que en la comisión se logró ayer un acuerdo en el sentido de modificar el inciso c) del apartado 2 del artículo 7º, suprimiendo el término "y". Considero que el único modo de que ese consenso se traduzca en una sanción legislativa es formular una moción de reconsideración del artículo 7º, que dejó planteada en estos términos.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración la moción de reconsideración formulada por el señor diputado por Entre Ríos.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Señor presidente: la comisión está de acuerdo en modificar el inciso c) del apartado 2 del artículo 7º, suprimiendo la conjunción "y".

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar la moción de reconsideración formulada por el señor diputado por Entre Ríos. Se requieren dos tercios de los votos que se emitan.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda aprobada la moción.

Corresponde considerar nuevamente el artículo 7º.

Se va a votar el artículo 7º con la modificación aceptada por la comisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el capítulo IV, que comprende los artículos 11 a 19.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Señor presidente: la comisión propone agregar el artículo 11 un nuevo apartado que llevaría el número 4 y que diría lo siguiente: "El Poder Ejecutivo nacional se encuentra facultado a mejorar las prestaciones dinerarias establecidas en la presente ley cuando las condiciones económicas financieras generales del sistema así lo permitan."

Asimismo, en relación con el artículo 13 proponemos agregar en el apartado 1, un tercer párrafo que diría lo siguiente: "El pago de la prestación dineraria deberá efectuarse en el plazo y en la forma establecida en la ley 20.741, (L.O. 1976) para el pago de las remuneraciones a los trabajadores."

A su vez, proponemos sustituir el apartado 2 por el siguiente: "El responsable del pago de la prestación dineraria retendrá los aportes y efec-

tuará las contribuciones correspondientes al sistema de seguridad social abonando asimismo las asignaciones familiares."

Asimismo, en relación con el artículo 15 proponemos reemplazar el apartado 2, por el siguiente: "Declarado el carácter definitivo de la incapacidad laboral permanente total (IPT), el damnificado recibirá las prestaciones que por retiro definitivo por invalidez establezca el régimen provisional al que estuviere afiliado."

"El damnificado percibirá, asimismo, en las condiciones que establezca la reglamentación, una prestación de pago mensual complementaria a la correspondiente al régimen provisional. Su monto se determinará actuarialmente en función del capital integrado por la ART. Este capital equivaldrá a 43 veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por un coeficiente que resultará de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante y no podrá ser superior a los \$ 55.000."

Igualmente proponemos que el artículo 18 sea reemplazado en su totalidad por el siguiente texto: "1. Los derechohabientes accederán a la pensión por fallecimiento prevista en el régimen provisional al que estuviera afiliado el damnificado y a la prestación de pago mensual complementaria prevista en el artículo 15 apartado 2."

"2. Se consideran derechohabientes a los efectos de esta ley a las personas enumeradas en el artículo 53 de la ley 24.241, quienes concurrirán en el orden de prelación y condiciones allí señaladas."

También proponemos reemplazar los apartados 1 y 2 del artículo 19 en su totalidad por el siguiente texto: "1. A los efectos de esta ley se considera renta periódica la prestación dineraria, de pago mensual, contratada entre el beneficiario y una ART o una compañía de seguros de retiro, quienes a partir de la celebración del contrato respectivo, serán las únicas responsables de su pago. El derecho a la renta periódica comienza en la fecha de la declaración del carácter definitivo de la incapacidad permanente parcial y se extingue con la muerte del beneficiario o en la fecha en que se encuentre en condiciones de acceder a la jubilación por cualquier causa."

"En el caso de empresas que no se afilien a una ART, dicha prestación deberá ser contratada con una entidad de seguro de retiro a elección del beneficiario. Esta, a partir de la celebración del contrato respectivo, será la única responsable de su pago."

El apartado 3 de este artículo 19 pasa a ser el nuevo apartado 2.

Sr. Gauna. — Señor presidente: son muchas y variadas las modificaciones que está planteando la comisión y si se consideran todas en conjunto y no se les da lectura por Secretaría se hace muy dificultoso trabajar.

Sr. Presidente (Pierri). — Lo que ocurre es que si la comisión va a proponer modificaciones debe hacerlo antes de que hablen los señores diputados, a fin de que si éstos a su vez van a solicitar cambios lo hagan conociendo el texto finalmente consensuado.

Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: es muy difícil votar por capítulos este proyecto teniendo en cuenta que las modificaciones que se pueden llegar a proponer son importantes. Algunas han sido consensuadas y otras no.

Con respecto al artículo 11 mantenemos nuestra objeción en cuanto al inciso 3, ya que hace desaparecer la responsabilidad del empleador en el caso de accidente *in itinere* y lo manda al sistema de seguridad social.

No puede ser más ambiguo este proyecto de ley. ¿Se refiere a las mismas prestaciones que establece la ley o a otras? El sistema de seguridad social, que actualmente está desfinanciado —como lo reconoce el gobierno—, está en condiciones de absorber estas nuevas prestaciones?

Esas son las dudas que tenemos con respecto a este nuevo sistema y consideramos que estamos condenando a los trabajadores a litigar o establecer nuevos reclamos, a veces sin ningún éxito.

Por ello proponemos dejar sin efecto el inciso 3 del artículo 11, porque en la legislación del Primer Mundo en la que se adoptó el sistema de cobertura de riesgo del trabajador a través de las compañías de seguro está en todos los casos incluido el accidente *in itinere*. Nos parece que la incidencia en términos de costos no va a ser tan grande como para impedir su aplicación.

En relación con el nuevo apartado que se propone para el artículo 11 debo decir que nos oponemos, porque se produce una delegación extrema de facultades al Poder Ejecutivo al decir que éste se encuentra facultado a mejorar las prestaciones dinerarias establecidas en la presente ley cuando las condiciones económico-financieras generales del sistema así lo permitan. Dichas prestaciones surgen de la ley, y para modificarlas habrá que hacerlo por medio de otra norma y no por la mera voluntad del Poder Ejecutivo.

En consecuencia, solicitamos la derogación del inciso 3 del artículo 11 y nos oponemos al agregado que planteó la comisión.

Estamos de acuerdo con la propuesta que se ha formulado para los apartados 1 y 2 del artículo 13.

En relación con el artículo 16 nos parece importante efectuar una consideración que hace un poco a la esencia del modelo que se va a aplicar con esta norma, que se refiere —sobre todo en el inciso 2— a la posibilidad de que el trabajador accidentado pueda pactar sus salarios en baja. Este inciso 2 tiene una redacción contradictoria que desnaturaliza el principio protectorio del trabajador. Cuando se habla de que los trabajadores podrán pactar un salario inferior al correspondiente al puesto o categoría que estaba desempeñando, lo estamos condenando a una situación de inferioridad. ¿Qué pasaría si ese trabajador no pactara su salario? Quedará en una situación de despido. O sea que lo estamos condenando a perder el trabajo después de haber sufrido un accidente.

Por lo expuesto, proponemos que se deje sin efecto el inciso 2 del artículo 16.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Zuccardi. — Señor presidente: desde el miércoles pasado, fecha en la cual la Cámara pasó a cuarto intermedio hasta el día de hoy, hemos estado analizando y realizando un estudio profundo de las modificaciones que se iban a proponer en la consideración en particular de este proyecto de ley. Es imposible trabajar con este mecanismo.

Por lo tanto sugiero a la Presidencia que tenga a bien invitar al cuerpo a pasar a un breve cuarto intermedio a efectos de que se nos distribuyan las modificaciones que ha elaborado la comisión —aunque sea, escritas a máquina en un papel— y podamos compatibilizarlas con las propuestas que cada uno de nosotros ha traído a la sesión. Seguir trabajando así, en forma verbal, hace imposible la tarea y la torna improductiva. No obstante en caso de que la Presidencia no acceda a esta petición formularé una serie de observaciones al capítulo en consideración.

Sr. Presidente (Pierri). — Ahora no se puede pasar a cuarto intermedio dado que ha costado mucho esfuerzo reunir quórum. La Presidencia solicita a la comisión que haga llegar a los señores diputados las modificaciones introducidas al texto original, de modo tal que la señora diputada pueda proceder a presentar su propuesta.

Sra. Zuccardi. — Señor presidente: con respecto al artículo 12 sugiero que a continuación de donde dice "...o al tiempo de prestación de servicio si fuera menor a un año..." el texto quede redactado de la siguiente manera: "por el número de días efectivamente trabajados o en los que el trabajador debió trabajar comprendidos en el período considerado".

Esta modificación se funda en que la referencia a la ley 24.241 se hace a efectos de que no queden dudas respecto de cuáles son las remuneraciones sujetas a cotización, sobre las que se calcula el ingreso base.

Se elimina la mención de los días corridos para hacer referencia a los días efectivamente trabajados o en los que se debió trabajar. Si las prestaciones dinerarias se dividen por el número de días corridos se obtiene un ingreso base distorsionado, computándose al trabajador todos los días del mes y no solamente aquellos en los que debió trabajar.

En relación con el artículo 13 proponemos eliminar del inciso 1, segundo párrafo, la oración que dice: "La prestación dineraria correspondiente a los primeros diez días estará a cargo del empleador". El fundamento de esta supresión es que está estadísticamente comprobado que más del 90 por ciento de los accidentes de trabajo se resuelven en un tiempo menor a los diez días que establece este dictamen. Las pequeñas y medianas empresas que se ven obligadas a asegurar ese riesgo por las ART van a asumir el costo de los seguros de accidente de trabajo, pero en el 90 por ciento de los casos las ART no van a cumplir con el contrato ya que —como dije recién— la casi totalidad de los accidentes de trabajo se resuelven en un plazo inferior a diez días.

Este inciso me parece muy beneficioso para las ART —porque quedan esos diez días a cargo de las empresas— y perjudicial para los pequeños y medianos empresarios, que van a tener que contratar el servicio de seguro con las ART.

Si bien tengo el texto redactado en mi poder, me parece que sería conveniente que primero se debatiera el espíritu de la propuesta, luego de lo cual podría indicar cuáles son las palabras que propongo eliminar y qué términos las reemplazarían.

Sr. Presidente (Pierri). — Ruego a los señores diputados que guarden silencio a fin de que podamos escuchar y analizar las propuestas que se formulan.

Sra. Zuccardi. — Señor presidente: sugiero como redacción definitiva del artículo 13 que

el primer párrafo del inciso 1 quede redactado tal como está, o sea que comenzaría diciendo: "A partir de la primera manifestación invalidante y mientras dure el período de incapacidad laboral temporaria (ILT), el damnificado percibirá una prestación de pago mensual, de cuantía igual al valor mensual del ingreso base".

Se elimina en el segundo párrafo de este apartado, la frase: "La prestación dineraria correspondiente a los primeros diez días estará a cargo del empleador". Asimismo, se elimina, en el mismo párrafo, la palabra "siguientes" y "la que, en todo caso, asumirá las prestaciones en especie".

El segundo párrafo quedará redactado así: "Las prestaciones dinerarias estarán a cargo de la ART".

En el apartado 3 se propone eliminar la palabra "no", donde dice "el trabajador no devengará remuneraciones de su empleador". El fundamento de suprimir la palabra "no" es que se posibilita que el trabajador cobre sus remuneraciones aparte de la prestación a cargo de la ART en concepto de indemnización. En caso contrario, estaríamos dejando sin efecto el pago indemnizatorio: se paga la prestación dineraria en lugar del sueldo. ¿Dónde está la indemnización?

En relación al artículo 14, sugerimos, en el punto 1, agregar la frase "de sus remuneraciones y", después de "...por el porcentaje de incapacidad, además...", y sigue el texto con la expresión "...de las asignaciones familiares correspondientes."

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio, para poder escuchar las modificaciones propuestas por la señora diputada proponente. De lo contrario, no se podrá seguir con la sesión, ya que en estas condiciones no se puede trabajar, y los taquígrafos tampoco escuchan.

Sr. Novau. — En estas condiciones, señor presidente, se produce una gran confusión, y no se pueden atender las propuestas que se formulan.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia desea señalar que no quiere nombrar a los señores diputados que están conversando, pero si es necesario lo va hacer. En todo caso, les sugiere que se retiren del recinto a la hora de votar.

Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Zuccardi. — Señor presidente: en relación a la modificación propuesta en el punto 1 del

artículo 14, el fundamento es que al igual que en el artículo 13, en el apartado 3, se está queriendo ignorar el pago de las remuneraciones. Por eso, como entendemos que no es el espíritu, querremos dejar expresa constancia de esto.

En el apartado 2, inciso a), vamos a sugerir, agregar en el segundo párrafo, luego de la frase "... multiplicar \$ 55.000 por el porcentaje de incapacidad...", la expresión "ajustable anualmente por la ley de convertibilidad o la norma que en su defecto se dicte".

En el artículo 15, referido a las Prestaciones por Incapacidad Permanente Total, propiciamos la eliminación de la expresión que hace referencia al 70 por ciento del valor mensual del ingreso base. El fundamento es que el proyecto prevé una indemnización del 70 por ciento del valor del salario, y consideramos que ella debe ser del ciento por ciento de ese valor. Además, se establece que no tiene beneficios previsionales en el período de provisionalidad, por lo cual hay que eliminar la palabra "no". En el último párrafo del punto 1 del artículo 15, donde dice "Durante este período el damnificado no tendrá derecho a las prestaciones del sistema previsional", sugerimos la supresión de la palabra "no", de forma tal que el texto quedará redactado de la siguiente manera: "Durante este período el damnificado tendrá derecho a las prestaciones del sistema previsional."

En el artículo 16, sugerimos la eliminación del apartado 2, con el cual prácticamente desaparecería la reparación y se menoscabaría el derecho constitucional de propiedad al afectarse la legítima indemnización de los perjuicios. Si se dejara este apartado, se estaría disponiendo que el trabajador pueda recibir un salario menor por haber padecido una incapacidad temporaria parcial. Por ejemplo, por la pérdida de una falange del dedo menor se podría pactar un salario inferior.

En el apartado 3 del mismo artículo 16, que con la modificación anterior se convierte en apartado 2, proponemos que se diga que el Poder Ejecutivo "deberá reducir los aportes y contribuciones al sistema de Seguridad Social", en lugar de "podrá".

El apartado 2 del artículo 17 prevé que la ART abonará al damnificado una prestación de pago mensual "equivalente a tres veces el valor del AMPO". Consideramos que la prestación debería ser de tres a cinco veces el valor del AMPO. El espíritu de la modificación es el siguiente. Por hipótesis, una persona con una incapacidad permanente necesita de la atención de otra persona para poder desarrollar los actos elementales de su vida. Con el valor actual

del AMPO, juzgamos que una prestación equivalente a tres AMPOS no alcanza para pagar los servicios de asistencia a una persona que padece una incapacidad permanente. Por lo tanto creemos que la prestación tiene que ser elevada al menos a cinco AMPOS.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Caima. — Sin perjuicio de compartir la exhortación que hace minutos se hizo a que nos escuchemos y sin perjuicio de no controvertir la experiencia parlamentaria del señor presidente, entiendo que con esta metodología es imposible seguir el tratamiento en particular. El señor diputado Borda ha propuesto amplias y profusas modificaciones, y lo mismo han hecho el señor diputado Pernasetti y la señora diputada Zucardi. Es imposible seguir este procedimiento porque no hay forma de retener las diferentes propuestas de modificación.

Por consiguiente, pediría que el proyecto se tratara artículo por artículo para conocer todas las modificaciones planteadas por los señores diputados, de modo de ajustarnos a una buena práctica legislativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente: estamos tratando en particular una ley muy importante, yo diría fundamental. Cuando se trató el proyecto en general, nuestro bloque cuestionó su filosofía y lo calificó de retrógrado en relación con los intereses de los trabajadores. No obstante eso, con buena voluntad y espíritu constructivo continuamos el debate en particular a fin de mejorar algunos aspectos del texto.

Sin embargo, como han dicho algunos señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra, es imposible que continuemos en esta metodología con el argumento de que nos ha costado mucho conseguir el quórum y de que si pasamos a un breve cuarto intermedio tal vez no volvamos a lograrlo.

Lo que realmente interesa aquí es obtener una norma que desde el punto de vista del oficialismo sea la mejor posible y desde el punto de vista de la oposición, la menos perversa para los intereses de los trabajadores.

No se puede continuar con esta metodología, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro bloque se encuentra en una situación de permanente inferioridad. Hoy nos enteramos por algunos de los diarios, y luego por boca del señor miembro informante de la mayoría, que ayer se celebró una reunión en la que se trató de consensuar aspectos particulares del proyecto y a la que no hemos sido invitados.

Lo menos que podía haber hecho el representante del bloque oficialista es haber entregado —como no lo ha hecho, todavía está a tiempo— una copia de las modificaciones introducidas al proyecto aprobado en general. La buena práctica parlamentaria indica que luego de publicado el dictamen de comisión los legisladores tenemos siete días para estudiarlo y hacer las observaciones correspondientes. Los bloques minoritarios son los que en el debate proponen correcciones o modificaciones.

Cuando el propio miembro informante de la comisión es quien modifica el texto original —sobre todo cuando se trata de varios artículos— lo menos que puede hacer es entregar una copia para que se pueda seguir su lectura.

Por lo expuesto, lo lógico sería que pasáramos a un cuarto intermedio para discutir este tema, y si esa metodología no fuera aceptada, deberíamos analizar el proyecto artículo por artículo. No podemos avanzar en esta tarea considerando capítulo por capítulo porque es imposible seguir las propuestas hechas por los diversos diputados, y sobre todo las extensas modificaciones introducidas por la propia comisión.

Hemos colaborado —eso quedó demostrado— y queremos seguir haciéndolo, pero pedimos que se nos faciliten los elementos necesarios para saber qué es lo que estamos votando. No podemos continuar de esta manera.

Sobre mi banca tengo numerosas modificaciones para proponer, pero con esta metodología lo único que se logra es confundir el debate, y finalmente se terminará imponiendo la mayoría por el peso de los números y no —como señalé durante el debate en general— por el peso de los argumentos y las razones.

Repito mis propuestas de pasar a un breve cuarto intermedio, y en caso de que este criterio no fuera adoptado, discurrir el proyecto artículo por artículo.

Sr. Presidente (Pierri). — Debo aclarar al señor diputado que su bloque ya cuenta con las modificaciones a las que se ha referido. Me acaban de informar que fueron entregadas a la diputada Zuccardi.

Por otra parte, estamos considerando el proyecto capítulo por capítulo en virtud de una decisión adoptada por la Cámara. Eso fue lo que en su momento solicitaron los señores diputados y la Cámara decidió actuar de esa manera.

Finalmente, le recuerdo que quien decide acerca de las propuestas de modificación de los legisladores es siempre la comisión.

Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Ibarreche. — Señor presidente: en realidad, los señores diputados Gauna y Polino ya se han adelantado a mi criterio. Desde la consideración del artículo 2º me parece un despropósito la forma como se ha planteado el análisis en particular del proyecto. Hemos caído en una situación fronteriza con la irresponsabilidad.

En primer lugar, se planteó que las fuerzas de seguridad estaban incorporadas en la iniciativa. Después se dijo que no se encontraban en esa situación. Se incorporó un texto que otorgaba facultades al Poder Ejecutivo. Luego suprimimos esa redacción y establecimos la obligación del Poder Ejecutivo de incorporar una serie de institutos al régimen, los mismos que el mensaje del Poder Ejecutivo había excluido con fundadas razones.

No quiero ser repetitivo. Mi desazón me va a llevar a pedir una autorización para abstenerme en las próximas votaciones en virtud de mi desconocimiento de esta iniciativa. Si bien estamos considerando un dictamen impreso el 9 de marzo —es decir, hace más de 90 días—, hoy nos encontramos con un proyecto distinto. Aunque reconozco la buena fe de los distintos bloques para enriquecerlo, el confuso procedimiento adoptado no se corresponde con un tratamiento en particular serio, dadas las correcciones y adiciones que se están proponiendo.

Así, por ejemplo, el 3 por ciento se eleva al 5, como si ello no tuviera ninguna implicancia económica. Se crean obligaciones, se determinan supuestos beneficiarios y se incorporan o suprimen causahabientes. Es poco lo que escuchamos y mucho menos lo que entendemos.

En síntesis, me encuentro ante una gran desazón. ¡Pobres los jueces que recurran al Diario de Sesiones para interpretar la voluntad del legislador! Solicito a la Presidencia que me permita abstenerme en las votaciones sucesivas de todos los artículos, a fin de no caer en una grosera y torturante convalidación de algo que desconozco.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores. — Señor presidente: estaba leyendo un comentario que escribió hace pocos días el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Nación —con esa capacidad tan notable que posee y lo reconocemos de decir cualquier barbaridad sin que se le mueva un solo músculo de la cara—, donde plantea dos cuestiones que no parecen centrales a los artículos que estamos considerando centrales en el sentido de que la realidad desmiente los dichos del ministro. Por

un lado, expresa que se va a evitar la alta litigiosidad que proviene de la industria del juicio. Además señala, como concepto general, que se va a proteger a los trabajadores y que esta iniciativa los beneficia.

Está sobrevolando en el ambiente la sensación de que la comisión no va a aceptar ningún tipo de modificaciones...

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia no ha dicho eso, señor diputado.

Sr. Flores. — Digo que es algo que se sobreentiende en función de lo que está ocurriendo. La comisión no va a aceptar ningún tipo de sugerencias porque es imposible que retenga las propuestas, ya que el trámite que se está siguiendo resulta más que confuso.

Para quienes durante muchos años levantamos con orgullo la bandera de la protección que la legislación laboral argentina otorgaba al trabajador, entendemos que especialmente el inciso 3º del artículo 11 y los 15 y 16 constituyen verdaderos retrocesos que van a causar perjuicios innegables a los trabajadores.

Estas normas son totalmente contrarias a la tradición que la Argentina ha tenido en materia de derecho del trabajo. Se enfrentan con la tradición que históricamente han sustentado los trabajadores organizados en la República Argentina en materia de normas laborales. También son contrarias a la historia política que reivindicamos, sobre todo la de los gobiernos justicialistas, que han introducido avances en materia laboral. Más que terminar con la industria de los juicios —y los que conocemos el país sabemos que la convivencia entre jueces venales y abogados venales no la determina una ley sino otras actitudes de control y designación de los jueces—, este tipo de normas provocará un enorme nivel de litigiosidad porque se dan contradicciones profundas con el derecho constitucional argentino.

Creo que esto es muy negativo y por lo tanto sugiero que se traslade a la seguridad social el concepto de los accidentes *in itinere*; es decir, aquellos accidentes que ocurren cuando el trabajador se dirige hacia su lugar de trabajo. A lo largo del texto de la norma de la impresión de que se intenta proteger a estas aseguradoras de riesgos de la eventualidad de tener que pagar aquellos supuestos de pérdidas de alta siniestralidad. Parecería que se pretende asegurar el negocio a un grupo de administradoras o aseguradoras, habida cuenta de que, dada la retención per cápita que se le va a hacer al trabajador, si bien no hay ningún estudio actuarial serio al respecto, estimo que en poco tiem-

po tendrán una acumulación de capital que les permitirá responder por estos accidentes *in itinere* que son una tradición del derecho laboral argentino.

En lo que se refiere particularmente al artículo 15, se establece un sistema discriminatorio de topes tarifados para los supuestos de incapacidad, lo cual me parece injusto y que debería ser eliminado.

En el artículo 16 se termina con el criterio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. A partir de esta norma empezamos a transitar el principio de la renunciabilidad; es decir, establecemos que el trabajador que está cobrando una indemnización porque tuvo un accidente de trabajo tiene derecho a retomar sus tareas en el lugar en el que estaba desarrollándolas. Esto significa que seguirá cumpliendo la misma función que cumplía antes porque, obviamente, si la norma se refiere al mismo lugar, nadie va a reasignárselo al trabajador que hoy no puede cumplir esa tarea como consecuencia de algún tipo de incapacidad física.

De todos modos se determina que el trabajador va a poder negociar con el empleador —en una situación de evidente desigualdad— un salario inferior al que estaba percibiendo, de lo que se desprende que dos personas que realicen la misma tarea van a tener diferente remuneración, con lo cual terminamos con el principio de que a igual trabajo igual remuneración.

Además, vamos a incorporar un nuevo elemento que sería interesante que el señor ministro Caro Figueroa tuviera en cuenta cuando se presente ante algún simposio internacional. Me refiero al hecho de que a desigual situación física corresponde desigual remuneración. Esto es verdaderamente un disparate. Es una vergüenza que en la legislación argentina se instituya este principio: el discapacitado cobra menos que el que está físicamente capacitado, aunque ambos estén en iguales condiciones para realizar la misma tarea, pues el que está discapacitado se verá obligado a aceptar la imposición de un salario menor.

Más allá de la impermeabilidad que hay en la comisión para tratar las modificaciones que se han sugerido, por lo menos en este artículo 16 se debería establecer que no se podrán pactar remuneraciones diferentes en el caso de que el trabajador que padezca una disminución física se reintegre a su tarea habitual.

Se trata de defender un principio básico de igualdad ante la ley que tiene que ver ya no con el derecho laboral argentino ni con la protección de los trabajadores, sino con el respeto de

las garantías constitucionales que existe en la República Argentina.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gama. — Señor presidente: mantengo el planteo metodológico que he expresado, más allá de que estemos amparados por un procedimiento que ha sido votado por la Cámara —como usted ha señalado— en relación con la consideración por capítulos. Si esto es así, solicito que a partir de aquí se vote por artículo, pues de lo contrario es imposible seguir trabajando.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Señor presidente: pensaba decir lo mismo que el señor diputado preopinante, pero quiero aclarar que el procedimiento adoptado para el tratamiento y votación en particular de este proyecto surgió de un acuerdo y no de una decisión unilateral de la comisión.

Es cierto que hemos estado reunidos en el día de ayer y que se han modificado muchos artículos. En esa ocasión estuvieron presentes algunos diputados radicales, pero no así legisladores de otros bloques políticos, que hoy están en el recinto. Nosotros estuvimos reunidos en la comisión durante toda la semana, y mantuvimos distintas entrevistas. Sucede que respetamos la metodología que adoptan los diferentes diputados, pero el procedimiento que ellos eligieron no fue precisamente el de la discusión profunda en el seno de la comisión sino otro muy distinto; de todas formas, reitero, respetamos las diferentes posiciones políticas.

Salvo mejor opinión, sugiero al señor diputado Gama que terminemos con este capítulo...

Sr. Presidente (Pierri). — Si me permite, señor diputado, eso es justamente lo que se ha propuesto. Es decir, terminar con la consideración de este capítulo y luego considerar cada artículo de los demás en forma individual.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: he escuchado atentamente el razonamiento del señor diputado Flores. Siendo fiel con lo que me dicta mi conciencia, aclaro que he de apoyar la propuesta de modificación que él pretende introducir.

Con respecto al punto 3 del artículo 11, no entiendo por qué razón el pago por los accidentes sufridos por el trabajador en el trayecto entre su domicilio y el lugar de trabajo tiene que ser abonado por la seguridad social, pues ésa es una responsabilidad del empleador y así fue por siempre en la República Argentina. Si esta obliga-

ción del empleador va a ser transferida a las aseguradoras de riesgo del trabajo, que así sea; pero no podemos cargar sobre la seguridad social una responsabilidad que nada tiene que ver con ella.

Por otra parte, también es correcta la apreciación del señor diputado Flores con respecto al artículo 16: si el accidentado vuelve a su lugar de trabajo no se pueden pactar salarios inferiores; se le debe respetar el salario pertinente; en caso contrario no podría volver a desempeñar las tareas que tenía pactadas.

En consecuencia, solicito que en este tema acordemos una redacción en la que resulte claro que si un hombre accidentado vuelve a su lugar de trabajo para desempeñar sus tareas habituales tiene que percibir el salario que cobraba hasta el momento en que se accidentó. (Aplausos.)

Por lo tanto, propongo que en el punto 3 del artículo 11 se sustituya la expresión "por el sistema de seguridad social en la forma que prevea la reglamentación," por la siguiente: "por el empleador o en su defecto las ART."

Asimismo, solicito que en el artículo 16 se suprima el punto 2, y, por ende, el 3 pase a ser 2.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: a título de colaboración quisiera mencionar que si se elimina el punto 3 del artículo 11, los accidentes *in itinere* quedan dentro del régimen normal de la ley y no es necesario aclarar si el pago lo debe efectuar el empleador o la ART.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: mi propuesta consiste en que el punto 3 del artículo 11 quede redactado del siguiente modo: "Las prestaciones dinerarias que correspondan en los supuestos de accidentes ocurridos en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, serán abonadas por la ART." Se sobreentiende que las empresas que no contratan el seguro y se autoaseguran se hacen cargo del pago.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. López (A. H.). — Señor presidente: solicito por su intermedio a la comisión que reflexione sobre la propuesta formulada por el señor diputado Pernasetti. Si se eliminara el punto 3 del artículo 11 se solucionaría todo el problema, porque los accidentes *in itinere* serían abonados por el empleador autoasegurado o por la ART. Este tema está previsto en un artículo anterior,

de modo que la ley establece las responsabilidades por los accidentes *in itinere*.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Borda. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores. — Señor presidente: sugiero la eliminación del apartado 2 del artículo 16 para que quede resuelta la cuestión, porque ya está contemplada la situación en la primera parte.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Borda. — Sí, la comisión acepta.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Zuccardi. — Señor presidente: me alegra la eliminación del apartado 2 porque es lo que habíamos propuesto inicialmente. Pero también llamo la atención en relación con el artículo 13, que entiendo no ha sido considerado integralmente cuando señala: "La prestación dineraria correspondiente a los primeros diez días estará a cargo del empleador. Las prestaciones dinerarias siguientes estarán a cargo de la ART la que, en todo caso, asumirá las prestaciones en especie."

Luego de consultas realizadas con especialistas en materia de medicina laboral se confirma por estadísticas que en un 90 por ciento los accidentes de trabajo se resuelven en un plazo menor a los 10 días, de modo que las pequeñas y medianas empresas que se verán obligadas a concretar el seguro con una ART se verán perjudicadas, ya que en el 90 por ciento de los casos ellas deberán cubrir el salario, cuando en realidad debería cubrirlo la ART, ya que para eso han realizado inversiones en la contratación de los riesgos del trabajo.

Le pediría al señor diputado Castillo, que entendiéndolo profundamente el espíritu de las reformas, que considere la posibilidad de contemplar la sugerencia que he planteado.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Borda. — La comisión no acepta la propuesta.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente: el artículo 15 se refiere a las prestaciones por incapacidad permanente total. Al respecto determina que: "...el damnificado percibirá una prestación de pago mensual equivalente al 70 % del valor mensual de ingreso base", y más adelante agrega: "Durante este período, el damnificado no tendrá derecho a las prestaciones del sistema previsional."

Creo que de esta forma el trabajador que se halle en una situación de incapacidad laboral permanente total, por el hecho de que sea provisoria —ya que aún no se la ha calificado como definitiva— queda ante una total desprotección, ya que sólo se le va a pagar el 70 por ciento del valor mensual de ingreso base y además le serán suspendidos los beneficios del sistema previsional.

Propongo que en este caso la remuneración se asimile al ciento por ciento y el trabajador quede amparado por el sistema de la seguridad previsional.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Borda. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el capítulo IV, que comprende los artículos 11 a 19, con las modificaciones oportunamente formuladas por la comisión y las posteriores propuestas que fueron aceptadas.

—Resultado afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 20.

Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: antes de hacer uso de la palabra desearía saber si la comisión va a proponer modificaciones a este artículo.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Borda. — Señor presidente: vamos a proponer que el apartado 2 de este artículo 20 quede redactado de la siguiente forma: "Las ART podrán suspender las prestaciones dinerarias en caso de negativa injustificada del damnificado, determinada por las comisiones médicas, a percibir las prestaciones en especie de los incisos a), c) y d)."

También vamos a proponer que se agregue un apartado 3 que diga lo siguiente: "Las prestaciones a que se hace referencia en el apartado 1, incisos a), b) y c), del presente artículo, se otorgarán a los damnificados hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas incapacitantes, de acuerdo a cómo lo determine la reglamentación."

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: estamos de acuerdo con las modificaciones propuestas por la comisión, pero debo recordar que habíamos consensuado con respecto al inciso 2 del artículo 20 —que establece que las ART podrán suspender las prestaciones dinerarias—

que no exista una facultad unilateral de las ART sino que medie primeramente un dictamen de la comisión médica. Por lo expuesto —debido a las conversaciones que mantuvimos en el día de ayer— planteo un agregado al final del inciso 2, que sería el siguiente: "...de los incisos a), c) y d), previo dictamen de las comisiones médicas."

Esto lo proponemos porque las indemnizaciones que se fijan tienen una naturaleza salarial y no podemos dejar al mero criterio de las ART la suspensión de esas prestaciones por el no uso de algunas de las establecidas en los primeros incisos de la norma.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores. — Señor presidente: dejar únicamente a la aseguradora la calificación de lo injustificado del accidente para recibir prestaciones en especie me parece a todas luces injusto. Si bien muchas veces la negativa de los trabajadores a recibir prestaciones en especie aparece como injustificada desde el punto de vista del empleador, la realidad demuestra después que esa negativa, basada en la mala calidad de los elementos, es verdaderamente justificada, por lo que no se puede colocar al trabajador en una situación así a la espera de la resolución de un juicio sobre este tema.

Por lo expuesto, propicio que el inciso b) quede redactado de la siguiente manera: "Prótesis y ortopedia y la renovación de esos aparatos cuando así sea requerido por su uso o nueva tecnología."

La cuestión práctica que se quiere contemplar es la siguiente. Muchas veces el empleador —ahora va a ser la aseguradora— cumple con la obligación de entregar, por ejemplo, una mano ortopédica a un joven que ha perdido su mano, pero ocurre que con el transcurso del tiempo el joven crece y necesita otra mano ortopédica, siendo frecuente —aunque ello vaya en contra de lo que debiera ser— la negativa a otorgar esa nueva prótesis amparándose en que ya se dio una. De esta manera se obliga a la gente a sufrir un enorme menoscabo en su dignidad, teniendo que soportar aparatos ortopédicos que son inadecuados.

Solicito a la comisión que incluya en este ítem la renovación de prótesis en aquellos casos en que por su uso o por avances tecnológicos ello fuera conveniente.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Señor presidente: el nuevo apartado 3 del artículo 19 establece que "las prestaciones a que se hace referencia en el apartado

1, incisos a), b) y c) del presente artículo se otorgarán a los damnificados hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas incapacitantes, de acuerdo a como lo determine la reglamentación". Vale decir que incluso por vía de la reglamentación se podrá contemplar lo que plantea el señor diputado. En consecuencia, la comisión ratifica el texto del presente artículo con las correcciones introducidas oportunamente.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 20, con las modificaciones propuestas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 21.

Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: nuestro bloque objeta terminantemente el tratamiento que da esta norma a las llamadas comisiones médicas, a las cuales atribuye la facultad de determinar la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad, el carácter y grado de la incapacidad y el contenido y alcances de las prestaciones en especie.

Estas comisiones médicas fueron creadas por la ley de jubilaciones y pensiones, en virtud de la cual aquéllas están financiadas por los aportes que hacen las distintas administradoras de fondos de pensión. Nos parece un despropósito mezclar dos tipos diferentes de comisiones médicas, una de naturaleza previsional y otra relacionada con los accidentes de trabajo. Es abundante la jurisprudencia de nuestros tribunales que mantiene la distinción entre la incapacidad derivada de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, con aquella que se considera a los fines previsionales. No podemos confundir ni homogeneizar criterios que corresponden a dos institutos absolutamente distintos por su naturaleza. Someter las decisiones sobre la naturaleza laboral de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, el grado de incapacidad, el contenido y los alcances de las prestaciones, a entes administrativos sin participación de los tribunales en la resolución de los diferendos —que incluso se pueden plantear entre las ART y los propios damnificados— es violar el derecho que tienen todos los ciudadanos de acceder a la justicia; además es colocar a los trabajadores en una situación de imposibilidad de hecho.

En la actualidad en el país hay seis comisiones médicas para todo el territorio nacional: por lo tanto, un trabajador que se accidenta en La Quiaca, Catamarca o Santiago del Estero, ten-

drá que ir a Tucumán, donde creo que está la sede de la comisión médica del NOA, para que le determinen el grado de incapacidad. Cuando planteamos esta cuestión ayer en la comisión nos dijeron que esperaban reorganizarlas y que cuando existan más casos habrá más comisiones médicas.

Pero si estas comisiones médicas son financiadas por las administradoras de fondos de pensión, no les va a hacer mucha gracia tener que establecerlas en cada una de las capitales de las provincias.

Por eso nos oponemos terminantemente a la asignación de funciones de calificación de naturaleza laboral a este tipo de instituciones administrativas. Al mismo tiempo solicitamos que, por lo menos, esas funciones estén a cargo de la autoridad administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través del Departamento de Reconocimiento Médico o de las entidades médicas profesionales de las provincias. Me refiero a la determinación del grado de incapacidad, con la posibilidad de que el trabajador, ante los diferendos que se planteen, pueda recurrir a los jueces naturales en cada una de las provincias. De esta forma se evitará implementar un procedimiento difícil y traumático, como el de recurrir a una comisión médica que no se encuentra en la provincia en la que vive el trabajador. No olvidemos que si la decisión de esa comisión médica no le satisface, deberá dirigirse a la comisión médica central ubicada en la Capital Federal; y en el supuesto de que no comparta lo dispuesto por ésta, tendrá la posibilidad de apelar ante la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Estamos condenando al trabajador a que se vea imposibilitado de ejercer sus derechos. Por eso pedimos la anulación del artículo 21, dejando librado a que sean las comisiones médicas locales las encargadas en cada una de las provincias de determinar el grado de incapacidad. Y en lo concerniente a la naturaleza laboral del accidente, la decisión debe quedar a criterio de los tribunales y no del ente administrativo.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Borda. — Señor presidente: en relación con el artículo 21 proponemos agregar un apartado 4 con el siguiente texto: "En todos los casos el procedimiento será gratuito para el damnificado, incluyendo traslados y estudios complementarios."

La comisión ratifica el texto del artículo, con el agregado que acabo de leer. Por lo tanto no se aceptan modificaciones.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores. — Señor presidente: lamento que no se acepte la modificación porque era bas-

tante atinada. De todas maneras existe una cuestión que me preocupa y en ese sentido deseo formular una pregunta a la comisión. Quisiera saber si dentro de las comisiones médicas se incluye —y si no es así, solicito que se lo haga— a los representantes de las asociaciones profesionales de los trabajadores.

Para la revisión de la incapacidad, además del abogado que puede llegar a tener o no el trabajador y además del representante médico del trabajador, creemos que debe incluirse al representante médico de la asociación profesional a la que pertenezca el trabajador, por la especialización que aquélla tiene en la respectiva área laboral. Por otra parte no modificamos el espíritu del artículo si expresamente disponemos que en las comisiones médicas debe estar incluido el representante médico de la correspondiente asociación de trabajadores.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro. — Señor presidente: con respecto al tema que plantea el señor diputado Flores quisiera señalar que los trabajadores están representados en el Consejo Consultivo Permanente a través de sus organizaciones gremiales, y que, además, conforme lo establecido en el artículo 51 de la ley 24.241, los médicos que integran las comisiones deben ser designados por concurso público de oposición y antecedentes. Creemos que de esta forma está garantizado con absoluta claridad y transparencia quiénes intervendrán en las comisiones médicas, lo que da la equanimidad y la seguridad que busca la modificación. Por lo tanto, estimo que es redundante el planteo del señor diputado Flores, por lo que la comisión mantiene la decisión que recién anunció el señor diputado Borda.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 21 con el agregado propuesto por la comisión.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 22 y 23.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 24.

Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Zuccardi. — Señor presidente: propongo agregar al final del apartado 1 del artículo 24 lo siguiente: "Los índices de siniestralidad presunta deberán ser confeccionados por la Superintendencia de Seguros y producir un informe anual estadístico."

Sr. Presidente (Pierri). — ¿La comisión acepta la modificación propuesta?

Sr. Borda. — La comisión no acepta la propuesta, señor presidente.

Sra. Zuccardi. — Señor presidente: solicito que se fundamente el rechazo de esta modificación.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 25.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 26.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rodríguez (Jesús). — Señor presidente: en este tema se sintetizan dos cuestiones sobre las que la Cámara, por distintos medios e iniciativas de diferentes bloques ha mostrado preocupación, y sobre las que me gustaría llamar la atención.

En este tema confluyen eventuales funciones reguladoras de la Superintendencia de Seguros y problemas de naturaleza laboral.

Deseo hacer hincapié sobre un aspecto que podríamos calificar de riesgoso y que consiste en asignar a la Superintendencia de Seguros facultades adicionales a las que hoy posee. Esta no es una institución reconocida por su excepcional eficiencia; es más: es uno de los sitios más preocupantes y en los que debería centrarse la acción de control.

Hace poco tiempo se sancionó una norma que fuera oportunamente vetada por el Poder Ejecutivo y en la que en rigor de verdad se resume lo que trato de significar. Me refiero a que en el mercado de seguros se presentaron complicaciones que estuvieron en la primera plana de todos los diarios.

En virtud de un decreto del Poder Ejecutivo, en un momento determinado todas las primas de seguro se vieron gravadas por una alícuota que tenía como destino financiar los quebrantos que el anterior Instituto de Reaseguros tenía con las compañías de seguros. Es así que en los dos años de vigencia de este impuesto sancionado por decreto se recaudaron alrededor de 600 millones de dólares. Con motivo de desprolijidades — como hoy se dice — en el manejo, esta institución debió ser allanada por la Justicia y sus funcionarios tuvieron que ser removidos;

a pesar de ello hoy le damos el control de las primas de seguros derivadas de los riesgos del trabajo.

Quiero llamar la atención sobre este aspecto porque si no somos capaces de mejorar los organismos de control, las posibilidades de tener mayores complicaciones de naturaleza financiera, institucional y económica serán crecientes.

Por lo expuesto solicito que, no en ésta pero sí en sesiones futuras, se aborde el problema del mercado de seguros y reaseguros porque estamos en una situación francamente muy comprometida.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Ratificamos el criterio sustentado en el dictamen.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Zuccardi. — Señor presidente: quiero aludir al punto 2 del artículo 26, que se refiere a los casos en que será revocada la autorización conferida a una ART. Solicito que se incorpore como causal de revocación el hecho de que se demuestre fehacientemente que la gestión de la ART refleja una caída de los índices de siniestralidad vinculados con cada uno de los riesgos. Espero que esta vez la comisión tenga una amplitud de criterio que le permita aceptar esta propuesta.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores. — Señor presidente: quisiera sugerir una sola modificación al artículo 26, que me parece que no contraría la intención de aprobar el artículo tal como está redactado.

El capital mínimo que se establece para una aseguradora es de un millón de pesos. Se trata de un monto verdaderamente bajo: con veinte siniestros máximos de 55 mil pesos, quedaría agotada la garantía. Por ello considero que el capital mínimo para constituir una aseguradora debe ser de 5 millones de pesos. Así se podría garantizar mejor a los trabajadores que las aseguradoras cumplan con las obligaciones que tienen a su cargo. En caso contrario, luego de abonar veinte siniestros máximos, que no es nada del otro mundo, se quedarían sin capital.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: mientras la comisión analiza las propuestas que se han formulado, podríamos buscar un procedimiento ágil para no tener que esperar que se forme el quórum ante cada votación. En este sentido se podría autorizar a la Presidencia a pasar lista,

considerándose ausente en la sesión a quien no figure presente al pase de lista. Me parece que es un procedimiento que podría ayudar a que los señores diputados permanezcan en sus bancas. En caso contrario, coincido con el señor presidente en que se hace muy difícil continuar con la sesión porque los diputados están en los pasillos, van y vienen; pero de esa forma, si se pasa lista y no están, perderían la condición de presentes.

Los pedidos de licencia que la Presidencia anuncia al comienzo de cada sesión nunca se refieren a 120 o 130 señores diputados. Es decir que los legisladores no tienen motivo para ausentarse, y una de las formas de evitarlo es que la Presidencia pase lista en el momento en que lo estime conveniente o considere que podría peligrar la continuación de la sesión.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿La comisión acepta las propuestas formuladas respecto del artículo 26?

Sr. Borda. — La comisión ratifica lo planteado en la norma.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 26.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia se permite sugerir a los señores diputados que, a efectos de poder continuar avanzando en el tratamiento de cada uno de los artículos, vayan formulando las observaciones o consideraciones que crean convenientes para que la comisión indique cuáles acepta y cuáles no, postergando la votación para el final del debate.

En consideración el artículo 27.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente: el artículo 27 se refiere a la afiliación. En el punto 2 se establece que las aseguradoras de riesgos del trabajo no podrán rechazar la afiliación de ningún empleador incluido en su ámbito de actuación. Es decir que se establece la obligación compulsiva, y me parece que esto es sumamente peligroso porque dice: "ningún empleador". Incluso en el caso de aquel que deja de cumplir con las normas más elementales de higiene y seguridad, un empleador totalmente irresponsable en el manejo de su empresa, por esta norma la aseguradora está obligada, si o sí, a aceptarlo de manera compulsiva. Creo que este inciso es sumamente peligroso y debería ser directamente eliminado.

Las aseguradoras tienen que tener el derecho o la facultad de admitir o no al empleador, o

en todo caso, si hay un rechazo, que lo sea con causa; pero no puede ser que no se otorgue a la aseguradora ninguna posibilidad, tal como surge de la redacción actual de este punto; tiene que aceptar a la empresa que esté dentro de su zona de actuación.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Balestra. — Señor presidente: deseo avalar lo señalado por el señor diputado preopinante y expresar una inquietud.

Nosotros estamos vinculados con ciertas organizaciones de seguros cooperativos y contemplamos con alarma esta situación. Creo que la norma tiene que propender a la seriedad y responsabilidad del mercado. Si nos vemos forzados a aceptar a cualquier empleador es evidente que esto, en un momento determinado, atenta contra los intereses de las empresas serias que actúan en el mercado.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: solamente deseo resaltar la preocupación del señor diputado Polino en el sentido de que las aseguradoras de riesgos del trabajo constituyan un negocio, no sea cosa que se vean obligadas a no dejar a ningún empleador afuera. Por este apartado lo que se pretende es justamente que, a pesar del riesgo que puede significar, ese empleador no sea dejado de lado y que las aseguradoras en el ámbito de actuación tengan que tomarlo obligatoriamente; en caso contrario, aquel empleador que afronte mucho riesgo por las tareas que se desarrollan no será afiliado por ninguna ART. No obstante, pongo de manifiesto la preocupación del señor diputado Polino por cuidar el negocio de las ART.

Sr. Polino. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente: en homenaje al clima en que estamos tratando esta iniciativa, solicito al señor diputado Castillo que retire lo que acaba de decir. No estoy vinculado a ninguna aseguradora ni a ninguna otra entidad; en consecuencia, me guían intereses de carácter general y no de índole particular. Por lo tanto, pido al señor diputado preopinante que modifique sus dichos porque ellos constituyen una agresión innecesaria.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: retiró lo dicho como pequeño chascarrillo de mi parte para romper un poco la monotonía en el tratamiento de este proyecto de ley.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Borda. — Señor presidente: la comisión no acepta las propuestas de modificación.

Sr. López (A. II.). — Si me permite, señor presidente, dejo constancia del voto negativo del bloque radical con respecto al artículo 27.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 27.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 28.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Borda. — Señor presidente: la comisión propone la supresión del apartado 3.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 28 con la modificación propuesta por la comisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 29.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Borda. — Señor presidente: como segundo párrafo de este artículo, la comisión propone el siguiente texto: "La insuficiencia patrimonial del empleador será probada a través del procedimiento sumarísimo previsto para las acciones meramente declarativas conforme se encuentre regulado en las distintas jurisdicciones donde la misma deba acreditarse."

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: apoyamos la propuesta formulada por la comisión. Nos preocupaba la necesidad de la declaración judicial que establecía la norma: mediante el procedimiento que se propone generamos una vía expedita para que el trabajador pueda cobrar su acreencia.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 29 con el agregado propuesto por la comisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 30.

Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Zuccardi. — Señor presidente: propongo que en el artículo 30 —referido al sistema de autoseguro— se agregue un inciso 2, cuyo texto es el siguiente: "Deberán constituir un fon-

do de reserva para riesgos laborales que será supervisado trimestralmente por la SRT." Esto tiene como objeto que las grandes empresas, que pueden autoasegurar a su personal, también tengan que cumplir con la constitución de un fondo de reserva para riesgos laborales. Ello no les va a significar ningún gasto extra y va a permitir transparencia y previsibilidad para los trabajadores de las empresas autoaseguradas.

A continuación del inciso que he propuesto solicitamos que se agregue, como inciso 3 el siguiente: "En cualquier caso deberán obtener autorización para autoasegurarse en riesgos del trabajo, conforme a la presente ley".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. López (A. II.). — Señor presidente: las observaciones que acaba de formular la señora diputada Zuccardi y otras cuestiones que no hemos podido consensuar con el bloque oficialista motivan que la bancada radical vote por la negativa el artículo en consideración.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Señor presidente: la comisión no acepta introducir modificaciones al artículo en consideración.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 30.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 31.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Señor presidente: la comisión propone diversas reformas para el artículo en consideración. Solicitamos que se reemplace el inciso e) del apartado 1 por el siguiente texto: "e) Informarán a los interesados acerca de la composición de la entidad, de sus balances, de su régimen de alícuotas, y demás elementos que determine la reglamentación."

En el inciso b) del apartado 2 sugerimos sustituir el término "informarán" por "notificarán", y para el inciso c) del apartado 2 proponemos la siguiente redacción: "Denunciarán a la ART y a la SRT los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan en sus establecimientos."

Por último, solicitamos que se agregue un nuevo inciso e) en el apartado 3 que diga así: "Denunciarán ante el empleador los accidentes y enfermedades profesionales que sufran."

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: apoyamos las modificaciones propuestas por la comisión teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 43 en el sentido de que el derecho a recibir las prestaciones de ley comienza a partir de la denuncia de los hechos causantes de daños derivados del trabajo. Por medio de estas modificaciones estamos imponiendo dos deberes esenciales tanto al empleador como al trabajador, quienes deberán comunicar la existencia del accidente o la enfermedad no sólo a la ART sino también a la autoridad de aplicación. Por lo expuesto votaremos por la afirmativa del artículo en consideración con las modificaciones propuestas por la comisión.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente: propongo que en el punto 3, referido a los trabajadores, se agregue un inciso con el siguiente texto: "No podrán transar sobre el alcance de ninguna prestación ni sobre su grado de incapacidad." Esta propuesta es en defensa de los trabajadores, quienes por razones fácilmente comprensibles podrían verse obligados en algunas circunstancias a efectuar transacciones en contra de sus legítimos intereses por su debilidad o su carácter de inferioridad en la relación laboral.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Señor presidente: la comisión no acepta la modificación propuesta por el señor diputado por la Capital.

Sr. Presidente (Pierri). — Con las modificaciones propuestas por la comisión se va a votar el artículo 31.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 32.

Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: con respecto a las sanciones y el sistema de penalidades que tiene previsto el proyecto de ley en tratamiento, hemos consensuado una reforma sustancial al artículo 32, eliminando también el contenido de la tercera disposición adicional del artículo 49.

Por lo tanto, el nuevo artículo 32 quedaría redactado de la siguiente forma: "Sanciones - 1. El incumplimiento por parte de los empleadores autoasegurados, de las ART y de las compañías de seguros de retiro de las obligaciones a su

cargo, será sancionado con una multa de 20 a 2.000 AMPOs (aporte medio provisional obligatorio), si no resultare un delito más severamente penado.

"2. El incumplimiento de los empleadores autoasegurados, de la ART y de las compañías de seguros de retiro, de las prestaciones establecidas en el artículo 20, apartado 1, inciso a) (asistencia médica y farmacéutica), será reprimido con la pena prevista en el artículo 106 del Código Penal.

"3. Si el incumplimiento consistiera en la omisión de abonar las cuotas o de declarar su pago, el empleador será sancionado con prisión de seis meses a cuatro años.

"4. El incumplimiento del empleador autoasegurado, de las ART y de las compañías de seguros de retiro de las prestaciones dinerarias a su cargo, o de los aportes a los fondos creados por esta ley serán sancionados con prisión de dos a seis años.

"5. Cuando se trate de personas jurídicas, la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes que hubiesen intervenido en el hecho punible.

"6. Los delitos tipificados en los apartados 3 y 4 del presente artículo se configurarán cuando el obligado no diese cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los quince días corridos de intimado a ello en su domicilio legal.

"7. Será competente para entender en los delitos previstos en los apartados 3 y 4 del presente artículo la justicia federal."

Creemos que con esta redacción receptamos en forma correcta el trabajo realizado en comisión, en el entendimiento de que había una superposición de delitos para un mismo hecho.

Por otra parte, en defensa de los intereses del trabajador y ante la falta de cumplimiento de los deberes de asistencia médica y farmacéutica, que es una prestación trascendente, hemos determinado la pena que establece el artículo 106 del Código Penal, referido al abandono de persona.

En orden a quiénes son los responsables, hemos identificado a sus representantes por tratarse de personas jurídicas, o sea a las personas físicas que las representan, las que responderán por los delitos tipificados en los apartados 3 y 4 de este artículo.

Reitero que hemos suprimido por innecesaria la mención de la cláusula adicional tercera del artículo 49 del proyecto de consideración.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Caama. — Señor presidente: voy a dar la conformidad del bloque radicial a la modificación propuesta por el señor diputado Pichetto, vicepresidente de la Comisión de Legislación Penal, porque traduce las inquietudes expuestas en las consideraciones en general, ya que existía una delegación en blanco de la multa, que era imposible de sostener. Por otro lado, la falta de tipificación de los deberes o incumplimientos —tal como ha dicho el señor diputado Pichetto— se perfecciona y caracteriza totalmente con la modificación propuesta.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Borda. — La comisión acepta la modificación propuesta.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 32 con las modificaciones propuestas por el señor diputado Pichetto, que fueran aceptadas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 33.

Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: nos preocupa la delegación que se hace al Poder Ejecutivo para fijar la contribución a cargo de los empleadores privados autoasegurados, porque esa delegación amplia torna incierto el Fondo de Garantía que se crea, al igual que en el artículo siguiente.

Esto nos parece poco serio, por lo que entendemos deberían fijarse pautas mínimas para que el Poder Ejecutivo pueda fijar esa contribución. En realidad, debería hacerse teniendo en cuenta la cantidad de empleados autoasegurados y el tipo de actividad que realizan para que pueda haber una base de certeza en cuanto a que ese fondo sirva realmente para atender la finalidad que tiene prevista la norma.

Por lo expuesto, anticipo el voto negativo de mi bloque para este artículo y el 34.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿La comisión va a mantener la redacción original?

Sr. Borda. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 33.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 34.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 35.

Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: por este artículo se crea la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que absorbe las funciones de la actual Dirección Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo.

Para nuestro bloque constituye un error mezclar la política de prevención de los riesgos con la reparación de los infortunios. Por lo tanto, vamos a votar negativamente este artículo, así como el 36.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿La comisión va a mantener la redacción original del artículo?

Sr. Borda. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 35.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 36 y 37.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 38.

Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. López (A. II.). — Señor presidente: en oportunidad de tratarse en general este proyecto de ley una de las objeciones que planteó el bloque de la Unión Cívica Radical consistió en la eliminación de la responsabilidad civil del empleador y, en este caso, de la SRT por los riesgos del trabajo. Es tan clara la desigualdad ante la ley, que patentizamos con un ejemplo dado por el señor diputado del bloque oficialista Bramelli en sus observaciones, cuando habla del andamio que dentro de una empresa puede caer sobre un obrero o un tercero. El tercero puede ser reparado integralmente en los daños sufridos mientras que el obrero no: a él se le aplican los sistemas de prestaciones que crea esta norma y que importa una merma respecto del régimen que tienen los obreros en la legislación actual sobre accidentes de trabajo.

Muchos comentaristas que asesoran a empresas y grupos de empresas en este país hablan de que cuando se planteen estos casos el trabajador va a optar por cobrar lo que le permite esta ley con el sistema de cuotas mensuales o periódicas y que, una vez obtenido esto, planteará la inconstitucionalidad de la norma por violación del principio de igualdad ante la ley y sacará a relucir el tema de la responsabilidad

civil, con claras posibilidades de éxito de acuerdo con la jurisprudencia predominante en el país hasta el momento, no pudiéndose prever que pueda variar en el futuro.

Creemos que el trabajador tiene derecho a la reparación integral de su daño. Se puede probar que se debe al riesgo de la cosa o a la culpa del impleador y no solamente al dolo, evidentemente debe ser reparado integralmente, porque el daño que pueda sufrir un trabajador no sólo lo incapacita por su trabajo sino también para desarrollar una serie de actividades, ya sea en el ámbito cultural, social, deportivo o de su vida familiar. En estos casos el trabajador debe ser indemnizado plenamente de acuerdo con el grado de incapacidad que tenga y los órganos que han sido afectados. En este sentido se orientó nuestra doctrina y jurisprudencia.

No hemos podido consensuar con el oficialismo la eliminación de este artículo pero, por un deber de conciencia y de responsabilidad como legisladores, debemos solicitar a la Honorable Cámara su supresión total para que los riesgos de responsabilidad de reparación integral del trabajador en los daños sean asumidos por las ART que deben contratar los empleadores.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿La comisión acepta la propuesta?

Sr. Borda. — No, señor presidente; mantenemos el texto.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 38.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 39.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Señor presidente, en el apartado 3 del artículo 39 se debe suprimir el resto de su texto luego del término "autoasegurados".

Además se propone agregar como apartados 4 y 5 los siguientes: "4. Si alguna de las contingencias previstas en el artículo 6º de esta ley hubieran sido causadas por un tercero, el damnificado o sus derechohabientes podrán reclamar del responsable la reparación de los daños y perjuicios que pudieran corresponderle de acuerdo con las normas del Código Civil, de las que se deducirá el valor de las prestaciones que haya percibido o deba recibir de la ART o del empleador autoasegurado.

"5. En los supuestos de los apartados anteriores, la ART o el empleador autoasegurado, se-

gún corresponda, están obligados a otorgar al damnificado o a sus derechohabientes la totalidad de las prestaciones prescriptas en esta ley, pero podrán repetir del responsable del daño causado el valor de las que hubieran abonado, otorgado o contratado."

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. López (A. H.). — Señor presidente: en este artículo, referido a la responsabilidad civil del empleador, mantenemos las observaciones formuladas y por ello señalamos que, si no se lo suprime, vamos a votar por la negativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores. — Señor presidente: este tema es muy serio y en ese sentido conviene llamar a la reflexión al bloque de la mayoría, porque el texto propuesto por la comisión y el espíritu que anima al artículo son sencillamente indefendibles, constituyendo además un enorme retroceso en lo que se refiere a la protección de los accidentados y a la valoración, de ahora en más, de la vida, del riesgo físico o del infortunio físico de los trabajadores.

Vale la pena señalar como ejemplo el de un operario que trabaja limpiando cloacas para una de las empresas de saneamiento y que por falta de elementos de seguridad se cae y muere, algo que no es nuevo ante la falta de seguridad que existe en las relaciones laborales en la República Argentina. Supongamos que ese operario tuviera veinte años. No sé quién explicará a la familia de ese trabajador que su vida vale 55 mil pesos.

Con este sistema estamos estableciendo un régimen de cotización de la vida que va a llevar a situaciones tan injustas como éstas. Supongamos el caso de dos personas que se encuentran en un determinado lugar; una de ellas trabaja atendiendo un motor, el cual no tiene el mantenimiento adecuado, no por dolo sino por negligencia del dueño de la empresa. Explota el motor en el momento en que otro señor trae una carta. Imaginemos que los dos pierden una pierna a raíz del accidente. Si la vida vale 55 mil pesos, en esta tabulación del infortunio que hace el mercado, cuánto le podrán dar por esa pierna? Digamos 20 mil pesos para cada trabajador. El señor que llevaba la carta podrá reclamar a la justicia que se valore su pierna o su infortunio físico como es debido, y nosotros nos vamos a encontrar con dos ciudadanos argentinos con un tratamiento desigual e inequitativo.

Esta norma encierra una vieja discusión —a la que muchas veces hemos tenido que atender quienes nos desempeñamos en el campo profe-

sional—, estimulada por las quejas de las empresas con respecto a lo mucho que tienen que pagar cuando se les muere un trabajador.

Es una vieja discusión sobre el valor de la vida humana, sobre las diferentes condiciones de trabajo en que se desenvuelve un operario en nuestro país y acerca de las mismas en las naciones más desarrolladas, donde la seguridad y la higiene en el trabajo son funciones que el Estado no delega y donde la utilización de todos los elementos que conciernen a la seguridad del trabajador es una obligación que cae severamente en las espaldas del empleador porque si no la ley lo castiga a él.

No se cumplen las normas sobre seguridad e higiene en el trabajo en la República Argentina. Lo sabemos todos: los abogados que hemos tenido que desempeñarnos en temas de derecho laboral y los amigos que son dirigentes gremiales. Menos se van a cumplir esas normas ahora, cuando una vida va a valer cincuenta y cinco mil pesos y poner en marcha un mecanismo de protección es mucho más caro.

¡Clarol! Se trata de proteger ni más ni menos que a la gente que trabaja. Esta norma salda la discusión. Apostamos por cotizar muy poco, por degradar la dignidad del que trabaja. Apostamos a que recie todos los días la familia del que trabaja en situaciones de riesgo para que no le vaya a pasar nada porque su vida la van a cotizar muy pero muy bajo.

Creo que es posible insistir para que se reflexione sobre esta norma. La posibilidad de llevar adelante una acción civil no puede quedar supe- ditada al dolo del empleador. Nos han hablado del caso de quien para cobrar un seguro provoca un incendio y se muere quemado. Esto es de película. Lo que sucede cotidianamente es que por impericia, negligencia, imprudencia o incumplimiento de los deberes a cargo del empleador, un operario sufre accidentes, y lo primero que decimos los abogados es que hay que ir a la acción civil porque es con ella como se podrá discutir un resarcimiento que tome en cuenta el valor de los daños causados por el infortunio.

¿Cuál es la razón para que en un choque se valore la vida humana diferente a lo que se la valora en un accidente de trabajo? El valor de la vida humana es uno solo y no se puede tabular de forma diferente porque algunos aleguen que de lo contrario subirán los costos empresarios. Esto es una barbaridad y un disparate.

Por las razones expuestas pido a los miembros de la comisión —que han tenido que lidiar más que yo con casos dramáticos como el que expuse al comienzo de esta intervención— que por favor eliminemos esta cláusula del artículo 39 que

únicamente permite acudir a la acción civil de reparación del daño y de los perjuicios en caso de dolo del empleador.

Que el día de mañana no tengamos que enfrentarnos con la situación de una familia de un trabajador accidentado o desaparecido y debamos lamentarnos por haber votado una ley que tabula la vida en la miserable suma de cincuenta y cinco mil pesos.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Garay. — Señor presidente: quiero hablar con motivo de la consideración de este artículo fundamentalmente para no incurrir en una actitud cómplice por un hecho realmente grave que está por consumarse en esta sesión.

Suscribo las expresiones del señor diputado Flores, que han sido patéticas, y agregó que estamos por violar grosoramente la Constitución, ya que ésta establece la igualdad ante la ley sin ninguna clase de privilegios, y aquí le estaríamos impidiendo al trabajador la vía civil para reclamar la indemnización integral por el daño sufrido, y a sus derechohabientes, en caso de muerte.

En legislaciones anteriores se contemplaban pautas de privilegio para quien invocaba el proceso por la vía de accidentes de trabajo. Tanto la ley 9.688 como la 24.028 establecían la inversión del *onus probandi* en favor del empleado. Aun así, cuando el daño sufrido tenía una dimensión determinada el empleado jamás optaba por la vía de la ley de accidentes de trabajo sino por la del derecho civil —padre de los derechos— que regula la reparación para todos.

Es absolutamente inconcebible —voy a dar un caso similar al del señor diputado Flores, pero en otro aspecto— que por un mismo hecho, como por ejemplo la pérdida de un producto tóxico en una fábrica —algo así como lo que sucedió en Chernobyl—, los derechohabientes reciban una indemnización mínima con relación a la que puedan percibir los vecinos por el efecto causado por la intoxicación derivada de la emanación de la fábrica.

Allí se advierte patente la diferencia de tratamiento otorgado a quien sufre el accidente, el infortunio o la muerte en razón de estar desarrollando su trabajo y a quien sufre consecuencias en razón de la vecindad.

Por otro lado, comparto el criterio de que parece una burla establecer la excepción basada en el artículo 1.072 del Código Civil, que se refiere al dolo. Es verdaderamente una burla; el dolo consistiría —más o menos— en la agresión del patrón al obrero. Eso no merece con-

templación de ninguna naturaleza porque no se trataría del accidente de trabajo típico, regular o cotidiano, sino de un hecho absolutamente excepcional.

También constituye un exceso y una actitud perogrullesca el agregado en el que se pretende que si fuera damnificado por un tercero el trabajador promoviera la acción contra el empleador y contra el tercero. Si no decimos nada acerca de esta cuestión, el derecho subsiste porque tenemos un derecho que globaliza y da fundamento a otros derechos.

También corresponde incluir a la parte punitiva del derecho penal, que se nutre del derecho extrapenal en lo que atañe a la conceptualización del deber ser. Ello es así aun cuando regula exclusivamente la sanción por la infracción a la norma tipificada.

Hoy estamos cometiendo una doble infracción. Cuando se habla de vincular un delito con la pena de otro delito preexistente se violenta la tipicidad. No cometamos un atropello contra la Constitución y la igualdad ante la ley. Estamos considerando como una *capitis diminutio* la situación del trabajador que sufre un accidente, concebiéndolo de una forma distinta y con una extensión diferente para quien trabaja y sufre un daño emanado exactamente de la misma causa.

El agravante reside en que el obrero que sufre un accidente mientras está paseando —siendo la causa generada por él mismo o por su imprevisión en el momento de su esparcimiento— puede lograr una reparación integral, mientras quien va a trabajar y realizar la más noble de las tareas, como buscar su sustento y el de su familia, está concebido como un minusválido del derecho, ya que sólo puede reclamar en forma parcial y el Estado le da la espalda.

El Congreso de la Nación tiene que tomar cartas ya mismo en este asunto a fin de evitar que se consuma un verdadero atropello al derecho del trabajador y del ciudadano y una violación grosera al principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. Fragoso.— Señor presidente: quiero expresarme en el mismo sentido en que lo hicieron los señores diputados Flores, Alcides López y Garay. A esta coincidencia seguramente se referirá algún otro diputado de nuestro bloque.

Se trata de lo que significa esta norma en el moderno derecho de daños. La propuesta de la comisión en el sentido de agregar la responsabilidad del tercero, sin las limitaciones que prevé

la iniciativa, ratifica la diferenciación que se plantea en el proyecto.

Siguiendo los preceptos jurisprudenciales existentes, seguramente esto se va a constituir en un elemento constante de iniciación de juicios. Creo en la justicia argentina y en una posible declaración de inconstitucionalidad por violación de la igualdad ante la ley.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Varela.— Señor presidente: el artículo en consideración está irremediablemente condenado a ser declarado inconstitucional, una, diez, cien o cuántas veces sea planteado ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial porque carece de todo sustento jurídico y es realmente violatorio de la Constitución Nacional y del principio de igualdad.

Más allá de que este artículo sea o no aprobado, su inaplicabilidad en el ámbito judicial es realmente incontestable; por eso y adhiriendo a los fundamentos que ya expresaron los señores diputados preopinantes, creo que sería una torpeza de nuestra parte aprobar este artículo de la manera en que está redactado.

Uno de los temas sobre los que más se ha escrito en materia de accidentes de trabajo es la acción resarcitoria proveniente de los artículos 1.109 y 1.113 del Código Civil. Pretender eliminar el derecho de cualquier ciudadano a recurrir civilmente, más allá del contenido gramatical de la ley, resulta totalmente inaplicable por algunos de los riesgos que ya señalamos, y puede producir un efecto exactamente inverso al que se pretende con la redacción de este artículo. Por ejemplo, un trabajador que percibe la indemnización prevista en la ley de riesgos del trabajo puede posteriormente recurrir ante los tribunales a reclamar, en virtud de la aplicación de los artículos 1.109 y 1.113 del Código Civil, los daños provenientes del hecho que haya acontecido.

Como bien lo dijera el señor diputado Garay, en la anterior ley de accidentes del trabajo la opción del trabajador de optar entre la vía civil y el resarcimiento establecido en los artículos 1.109 y 1.113 del Código Civil o la ley de accidentes del trabajo, era simplemente una cuestión procedimental presuncional. La ley de accidentes del trabajo y el derecho laboral en general prevén una serie de presunciones favorables al trabajador no previstas en el fuero civil. Sin embargo, y pese a ello, la mayor parte de las acciones resarcitorias provenientes de accidentes del trabajo se recurren ante el fuero civil.

Por eso, atendiendo al pedido de brevedad formulado por la Presidencia, más allá de la aproba-

ción o no de este artículo creo que se trata de algo inaplicable y por lo tanto considero que de ninguna manera debe ser aprobado tal cual ha sido redactado.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Molinas. — Señor presidente: para quedar tranquilo con mi conciencia quiero dejar fundado mi voto en contra de este artículo.

En el transcurso del debate de esta norma hemos visto cómo han ido cayendo los derechos de los trabajadores, a punto tal que creo que debería constituirse una comisión para reelaborar el derecho del trabajo desde la época de Alfredo Palacios en adelante. No quiero que mi nombre figure entre los que aprueben este castigo a los trabajadores. El hecho de ser trabajador importará una disminución, un castigo que no sufrirá otra persona que haya tenido un accidente.

Reitero: a efectos de que mi nombre no figure en la lista de los enterradores del derecho del trabajo, me opongo a este artículo pues considero que constituye un castigo para el trabajador en lugar de tratar de protegerlo.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: ante las expresiones de los señores diputados preopinantes, abonadas con conocimientos jurídicos en materia de derecho del trabajo, me corresponde defender la posición del bloque oficialista con respecto a la redacción del artículo 39, que realmente constituye el eje central del proyecto de ley que estamos tratando en este Parlamento.

El proyecto tiene un sentido fundamental: está dirigido especialmente a la instauración de un sistema de seguridad social en orden a los accidentes laborales, y también apunta a la previsión por parte del empleador. Como segunda intención, el proyecto de ley tiende a reducir los costos que en materia de accidentes de trabajo soportan las empresas, mediante el establecimiento de los seguros. Esto constituye, repito, el tema central de la iniciativa en tratamiento.

Desde el punto de vista del derecho del trabajo, en materia de accidentes, la indemnización, desde sus orígenes, siempre ha sido tarifada o tabulada.

Luego de la reforma del Código Civil, mediante la incorporación de las teorías de la culpa y la concausa en su artículo 1.113, la doctrina y la jurisprudencia realizan un desarrollo de la acción civil donde se plantea el tema de la reparación integral, que ha sido distorsio-

nada en los últimos años y ha conformado lo que en la Argentina se dio en llamar la verdadera industria del juicio. Se trata de juicios por accidentes de trabajo —dirigidos especialmente a empresas del Estado y a entidades privadas— que han provocado fuertes desequilibrios.

Por lo tanto, planteamos como única excepción la responsabilidad derivada del artículo 1.072 del Código Civil, que se refiere al dolo del empleador. Consignar los artículos 1.109 y 1.113, como planteaba un diputado de mi bloque, implicaría abrir nuevamente la brecha de la acción del derecho común y las indemnizaciones integrales sin límite, que afectan al trabajo, a la empresa y, fundamentalmente, al propio derecho del trabajador.

Estamos planteando una indemnización de origen de cincuenta mil pesos, que en un proceso de tres años va a llegar a ciento diez mil pesos. Si bien como dijo el señor diputado Flores se trata de una indemnización que no cubre el valor de una vida, es un valor posible y real dentro de un sistema de seguridad social destinado a garantizar la indemnización por accidente de trabajo, a generar mecanismos que permitan mayor empleo en la Argentina y a reducir los costos empresarios.

Sobre la base de los argumentos que he esgrimido, sostenemos el artículo 39 tal como está redactado.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Di Tulio. — Señor presidente: cuando en el año 1991 llegué a esta Cámara ello me pareció un sueño, porque nunca había imaginado que como trabajador tendría la oportunidad de estar en este lugar donde se defienden los intereses de la gente, sobre todo de los más desprotegidos.

Hoy tengo que decir que estoy viviendo un mal sueño. No puedo entender que la gente que dice ser del bloque Justicialista, quienes enarbolan la bandera de la defensa del trabajador, vengán con argumentos como el que acaba de utilizar el compañero que ha hecho uso de la palabra, en el sentido de que las empresas tenían que soportar grandes juicios por accidentes de trabajo.

Soy un trabajador que viene de YPF, casado, y además soy docente. Es cierto que las empresas han tenido que soportar estos juicios, pero ello ha sido en el marco de la complicidad de los abogados con los dirigentes gremiales. Esto tiene que quedar bien claro: a lo largo y a lo ancho de la Argentina, de La Quiaca

a Lapataia y desde la Cordillera hasta el Atlántico, muchos dirigentes gremiales se han enriquecido a costillas de la vida de muchos trabajadores.

No puedo entender que los compañeros del bloque Justicialista utilicen argumentos como los que acaban de exponer. Recién me he enterado de que quien ha hecho uso de la palabra ha sido abogado laboralista de una empresa que este gobierno fundó: Hipasam. Es lamentable que se precie la vida de un trabajador en cincuenta o cincuenta y cinco mil pesos. Los compañeros no tienen idea de lo que significa trabajar en terminación, perforación o *pooling*, donde todos los días hay un accidente de trabajo! ¿Cuál será la muerte de las familias de estos hombres a partir de la sanción de este proyecto de ley de desprotección del trabajo? ¿Qué vamos a decir a esta gente? Como ya lo mencionó el señor diputado Molinas, yo no quiero ser un trabajador que claudique en cuestiones fundamentales como ésta.

Por último, deseo señalar que los radicales no tenemos dudas de que éste es el eje fundamental de esta norma y de que no tuvieron la valentía de presentar una iniciativa con este artículo solamente; por eso se elaboró este texto de traición a la clase trabajadora.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: el miembro informante de la mayoría que defendía este texto expresó que se trata de un artículo fundamental que tiene que ver con el esquema total de la norma. Uno de los objetivos de este proyecto es disminuir la litigiosidad y dar previsibilidad a los costos del trabajo. Sabemos también que esta iniciativa es producto de un acuerdo marco suscripto entre la Confederación General del Trabajo, la Unión Industrial Argentina y el gobierno.

Al respecto quiero llamar a la reflexión a los señores diputados justicialistas porque en su edición del día de la fecha "Ámbito Financiero" publica un artículo firmado por Julián de Diego, que como a todos nos consta es abogado de la Unión Industrial Argentina, en el que hace una crítica lapidaria de este proyecto. Incluso lo considera regresivo porque acepta como mucho más positiva la opción del artículo 17 de la ley 9.688, que obligaba al trabajador a optar por la indemnización tarifada o por la vía civil. De este modo se destruye esa opción, y según De Diego "el actual proyecto no resuelve la conflictividad judicial que no tiene límite ni topos y simultáneamente duplica los reclamos en un

sistema que ya había admitido la opción excluyente." Incluso cuando la ley 9.688 admitía la responsabilidad civil en caso de culpa o de lo únicamente la jurisprudencia fue abriendo el camino para la responsabilidad por riesgo de la cosa, como bien lo plantearon los señores diputados preopinantes.

Pero quiero reiterar los conceptos de De Diego y leer textualmente parte de su artículo, que dice así: "¿Cuál es la consecuencia previsible del actual proyecto? Significando un esquema que el ministro Caro Figueroa suele citar, y que consideramos fundamental en cualquier análisis de una ley, 'una cosa es analizar el contenido de una ley y sus eventuales consecuencias, y otra completamente distinta es verificar el modelo resultante en la realidad'. Al respecto, es previsible que cualquier damnificado reclame primero los beneficios de la ley especial suministrados a través de las ART o de las empresas autoaseguradas, y luego, una vez consolidados esos derechos, formule la reclamación por la vía civil solicitando la inconstitucionalidad del artículo 39 por violar el principio de igualdad."

Estos conceptos, que provienen de un asesor de la Unión Industrial Argentina, nos muestran que la redacción que se pretende dar a este proyecto de ley no tiene consenso y está irremediablemente destinado al fracaso.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Salta.

Sra. Maidana. — Señor presidente: no pensaba hacer uso de la palabra esta noche habiéndola cuenta de que mucho de lo que aquí se ha dicho ya lo expresé en la reunión anterior, al referirme a la postura del grupo de los partidos provinciales que vamos a votar en contra de este proyecto de ley.

Sin embargo, es necesario dejar sentado nuevamente nuestro criterio en orden al texto del artículo 39. No sólo se trata de una norma absolutamente inconstitucional sino que volvería a mi provincia con un verdadero cargo de conciencia y sin poder mirar de frente y a los ojos a los trabajadores si no reiterara lo que de alguna manera ya he expuesto.

No es bastante ni suficiente votar negativamente, es necesario señalar una vez más que aquí se produce una verdadera discriminación contra el trabajador.

Oportunamente las mujeres logramos una legislación que nos permitió corregir una discriminación fáctica al sancionarse la ley del cupo. Así como defendí el derecho de las mujeres, corresponde que ahora defienda el derecho de los trabajadores.

Pido a los señores diputados que, por favor, respetemos las disposiciones de la Constitución Nacional. El artículo 39 de este proyecto es absolutamente inconstitucional, y contrariamente a lo que se dice en el sentido de que de este modo no se fomentará la industria del juicio, una vez sancionada esta iniciativa los juicios van a proliferar, por lo que, precisamente, no debemos aprobarla acudiendo a ese argumento.

Además, los costos laborales no pueden aliarse siempre por vía de la parte más débil de la relación de trabajo, que es el trabajador. Busquemos otras formas de disminuir los costos laborales, pero no apoyándonos en normas como las que se plantean. Violar una garantía constitucional mediante una ley significa dar un mal ejemplo, y lo que se logra es que nadie respete el orden jurídico consolidado, que es lo que siempre debemos tener presente, buscando que esas normas que presentan un marcado cariz inconstitucional desde su nacimiento no se dicten.

Durante el curso de esta reunión se han aprobado artículos cuyo texto ni siquiera hemos tenido la posibilidad de leer ni reflexionar sobre su contenido, como oportunamente lo han hecho notar varios diputados que me precedieron en el uso de la palabra. De manera que ruego a la Cámara que no cometamos el error de aprobar un texto de esta naturaleza.

Como dije al comenzar mi exposición, no tenía el propósito de hablar sobre este asunto, porque generalmente y, por lo que se advierte, los diputados de la minoría exponemos mientras los de la mayoría hacen oídos sordos. Quisiera que en esta ocasión no preste oídos sordos y rechace este artículo. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Garay. — Señor presidente: la mejor defensa del oficialismo para sostener su posición hubiera sido el silencio. Aquí se ha dicho que la razón de ser de la futura norma es la reducción del riesgo empresario. Podemos comprender que se apunte a ese objetivo, con una mira general que tienda al beneficio general de la comunidad mediante la reducción de costos, precios, etcétera.

Se nos ocurre pensar que el fundamento de la norma está dirigido a la búsqueda de la inevitabilidad del accidente, mediante normas de seguridad, con el contralor de las ART y las SRT. También está dirigido a la posibilidad de la denuncia del propio obrero. Todo esto nos parece atinente en la procura de disminuir el riesgo empresario, porque seguramente esa disminución redundará en beneficio de la comunidad al abaratar los costos.

Pero cuando se habla específicamente de que esta reducción del riesgo empresario se refiere a no cargar al empleador que optó por el auto-seguro o por el propio seguro y romper el mecanismo de seguro, con la posibilidad del reclamo civil y la indemnización integral, no estamos diciendo otra cosa que el empresario no asuma riesgos y que los ponga a cuenta del dependiente.

Por ello nos parece absurdo e irracional que un obrero que vuelve a su casa y sufre...

Sr. Venesia. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Garay. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Venesia. — Señor presidente: desde que he ingresado a esta Cámara siempre me ha agradado escuchar al señor diputado Garay. Lo considero un entendido del derecho. Seguramente debe ser profesor universitario o un tratadista de nota.

Dado el cariz que está tomando esta reunión, quisiera formular una pregunta a él y a los abogados presentes: ¿se enseña en la universidad argentina que en los casos de accidentes que luego provocan muerte existen distintos valores indemnizatorios?

Hace un instante preguntaba algo similar a otra autoridad en la materia, el señor diputado Molinas. Me decía que existían razones de edad respecto del accidentado para establecer las indemnizaciones. Realmente, ¿hay algún juez salomónico, con tanta sabiduría, que pueda fijar distintos precios a la vida humana?

También escuchaba al joven diputado Flores, quien estaba enardecido y convencido de sus argumentos. Seguramente ha tenido que defender casos distintos. La vuelvo a preguntar: según el derecho argentino, ¿se puede llegar a los estrados judiciales y poner distintos precios a la vida humana, de acuerdo con las condiciones del individuo? ¿Existen realmente esos valores? De ser así, ¿quiénes son los que están en condiciones de fijar esas indemnizaciones?

Me gustaría que los más expertos en derecho nos aclararan a los que somos totalmente legos cuál es el fundamento jurídico para llegar a decir que la accidentología presenta distintos valores y que éstos pueden ser fijados por peritos, jueces y abogados de común acuerdo. Quisiera ir al fondo de esta cuestión porque para poder votar esta norma quiero ser "desasnado" sobre el particular.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Garay. — Señor presidente: espero dar una respuesta satisfactoria a la pregunta del señor diputado Venesia, que sin duda encierra un profundo basamento filosófico, jurídico y político. Aquí están en juego dos expresiones: una se llama igualdad y la otra, igualitarismo. La igualdad consiste en dar tratamiento igual a los iguales y desigual a los desiguales, mientras que el igualitarismo —que fue el objetivo de cierta doctrina en algún momento— implica dar tratamiento idéntico a todos. Por eso es que nuestra legislación trata desigualmente a las personas y concibe para ciertos individuos con menor aptitud normas tuitivas, por ejemplo para los menores, para los discapacitados, para los ancianos o para los jubilados.

Es absolutamente distinto el tratamiento que hace la ley, y precisamente la justicia de la igualdad consiste en ese tratamiento desigual a los desiguales. Pero tratar de expresar a la Cámara por qué los hombres son desiguales me parece una obviedad o una expresión perogrullesca. Nosotros somos desiguales por naturaleza. No existen dos hombres idénticos, ni siquiera en el aspecto físico; ni las impresiones digitales de las personas son iguales. Con más razón, cuando cada persona desarrolla su vida de convivencia o de trabajo se observa que uno se supera y que otro no lo hace porque no quiere o porque no puede porque las circunstancias se lo impiden o porque por filosofía no desea hacerlo.

Sr. Presidente (Pierri). — Señor diputado: debe redondear su exposición ya que su tiempo ha vencido. Esta es la segunda vez que hace uso de la palabra sobre este artículo.

Sr. Garay. — Señor presidente: oíre que me han formulado una pregunta que quiero contestar en breves minutos.

Sr. Presidente (Pierri). — Su tiempo ha concluido, señor diputado, de modo que no puedo extenderse. Le pido que redondee su idea ya que hay siete diputados anotados para hacer uso de la palabra sobre este tema.

Sr. Garay. — Ya concluyo, señor presidente.

Dejando de lado el tema de la igualdad —obviamente el trato debe ser desigual—, quiero expresar que el valor de la vida humana es distinto y que este proyecto está profundizando la desigualdad, llegando a un igualitarismo o un trato idéntico a quienes pueden tener distintas indemnizaciones, inclusive abandonando la que corresponde a la familia cuando se trata del daño moral, por ejemplo, que no se puede requerir por la vía de la ley de accidentes de trabajo. Pero obsérvese que esta ley trata desigualmente, produce la desigualdad: al que está trabajando se le va a pagar una suma tarifada —no

más de 55 mil pesos—, mientras que al individuo que está de vacaciones, si sufre un accidente se le pagará la reparación integral.

Entonces, no somos nosotros los que inventamos la desigualdad, sino que nos estamos oponiendo al igualitarismo y a la desigualdad ante la ley, que es una cosa distinta.

Por último, quiero señalar un ejemplo que, a mi juicio, esclarece la situación. Supongamos el caso de un trabajador que sale de su empleo y se dirige a su casa en su automóvil. Si es embestido por un vehículo de reparto de la empresa en que trabaja está sufriendo un accidente *in itinere*, y en el supuesto de que fallezca su familia va a percibir la suma de 55 mil pesos. Sin embargo, si tiene la suerte de ser atropellado por un camión de otra empresa, va a percibir una reparación integral.

Por lo expuesto, quiero expresar que si de alguna manera contribuyo a la sanción de este artículo 39, no me voy a sentir un traidor a los derechos de los trabajadores, sino un traidor al hombre, al ciudadano y a la especie humana. (Aplausos.)

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 19 de la Honorable Cámara, doctor Carlos Alberto Romero.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Fernández Meijide. — Señor presidente: brevemente voy a referirme a las expresiones del señor diputado Venesia, quien señaló que no habría lógica para que un juez determine que la vida de un trabajador con hijos pequeños, que dependieran de él, merezca una indemnización diferente a la de un soltero.

Debo decirle que en países avanzados como Canadá se exige que el soltero pague un seguro de vida mayor que un casado con hijos.

En las naciones democráticas, los jueces pueden establecer la existencia de matices, pero estas resoluciones no las toman solos sino con la colaboración de especialistas, como por ejemplo médicos y psicólogos, que los orientan para que puedan determinar esas diferencias.

El absurdo es que lo que no pueden hacer los jueces lo podamos hacer nosotros, fijando en 55 mil pesos el valor de la incapacidad que pueda sufrir el trabajador. Nosotros, los diputados de la Nación, que hemos sido elegidos para otra cosa, terminamos estableciendo que la vida de una persona que trabaja y que sufre un accidente vale solamente 55 mil pesos. ¿Por qué nosotros vamos a ser más capaces que un juez de la Nación?

Aclaro que esta pregunta no va dirigida al señor diputado Venesía, y no vale la pena que me la conteste. Me parece que estamos asistiendo a un momento muy crítico en lo concerniente a la relación entre nuestra oferta electoral y quienes nos eligieron, por un lado, y la coherencia de nuestra labor, por otro.

Por lo tanto, voy a señalar que bajo ningún punto de vista vamos a prestar nuestro apoyo a esta barbaridad.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores. — Señor presidente: como he sido aludido por el señor diputado Venesía, me veo en la obligación de hacer una aclaración. Conozco y respeto al señor diputado por Santa Fe desde hace muchos años, respeto que no ha menguado, pero yo no esperaba ni tampoco sospechaba que dentro de su suave personalidad se escondiera un ferviente anarquista. Esto viene a cuento porque vale la pena refrescar al señor diputado Venesía que las sociedades se construyeron sobre la base de determinadas ficciones. Hay hombres que imparten justicia y que tratan en forma desigual situaciones de otros hombres. Hay jueces a los que hemos dado el derecho de enviar a la gente a prisión; hay jueces a los que otorgamos el derecho de evaluar de manera distinta conductas que a otros nos parecen iguales. Sobre la base de esos sobreentendidos es que se construyen las sociedades modernas para que no impere la ley de la selva.

Lo que tiene que quedarle claro al señor diputado Venesía es que si se vota el artículo 39 tal cual lo propone el proyecto vamos a asumir nosotros, los legisladores —como decía la señora diputada Fernández Mejjide—, ese rol de jueces supremos. Vamos a establecer a la vida de determinadas personas un tope indemnizatorio de cincuenta y cinco mil pesos, y a la vida de otros no le vamos a fijar topos.

Para ilustración del señor diputado Venesía cabe mencionar que en el derecho argentino se ha ido conformando una vasta corriente jurisprudencial, que abarca prácticamente todos los casos conocidos de infortunios laborales y que en términos generales sienta criterios para valorar las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar que califican cada uno de esos infortunios porque las circunstancias de dos accidentes no son en general las mismas y son los jueces los que deben valorarlas —por más que sea una ficción de las sociedades modernas— que a los jueces de primera instancia los corrigen los miembros de las cámaras de apelación y a éstos, los jueces de las cortes supremas. No quiero abun-

dar en esta cuestión porque sería llevar el debate a donde no debe ir, pero si le tiene que quedar claro al señor diputado Venesía que si se aprueba este artículo los legisladores estaremos asumiendo un rol que individualmente considerados cada uno de nosotros no quiere asumir.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. López (A. H.). — En realidad nos estamos quedando para ver con qué ánimo y con qué cara van a ir colocando las llaves los diputados del oficialismo para votar esta ley que es inconstitucional en este artículo 39 y en varias otras disposiciones.

Es inconstitucional cuando pretende regular el empleo público nacional y provincial; cuando delega en el Poder Ejecutivo facultades que tiene y que debe reglamentar; cuando en la reforma propuesta en el artículo 40 delega —ya absurdamente— en el presidente de la Nación la potestad de arbitraje en el caso de que no se alcance unanimidad en el Comité Consultivo Permanente.

Es además inconstitucional porque viola el Pacto de San José de Costa Rica —incorporado a la Constitución Nacional en la reforma de 1994— cuando se establece un mecanismo no judicial con recursos absurdos en materia de tiempo, para llegar a una única instancia judicial de apelación que es la Cámara Federal de la Seguridad Social, instalada en la Capital Federal, adonde deberá concurrir el trabajador con su abogado para sustanciar el recurso. ¿Cómo es posible concebir que un trabajador del lejano sur tenga que acercarse a la Capital Federal para interponer un recurso? Cuando se establezca que el recurso puede plantearse genéricamente ante la justicia federal, con la exigencia de que ésta lo eleve a la Cámara Federal de la Seguridad Social dentro de un plazo razonable, esto no significa que sea prescindible el dictamen de la Comisión Médica Central; como ésta también se encuentra radicada en la Capital Federal, difícilmente podrá acceder el trabajador a la comisión de alzada.

Esta norma es inconstitucional porque contraviene el artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica que establece: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". En este caso, la persona no va a poder ser oída en un plazo razonable por el tribunal competente.

Aunque esta ley sea sancionada, los tribunales la declararán inconstitucional y no se podrá llevar a cabo el negocio de acumulación de capitales en las ART. Esto es algo que ya han planteado los abogados de las empresas.

Tal como señalaba el señor diputado Perna-satti, considerar que esta norma es constitucional es solamente un capricho; basta con analizar el texto del artículo 39.

Además, insisto en señalar que significa un grave perjuicio para la pequeña y mediana empresa. Tal como señaló la señora diputada del Frepaso al plantear el tema, la pequeña y mediana empresa quedan en una situación de desigualdad, de la misma manera en que quedan los trabajadores con relación al resto de los ciudadanos.

Aunque esta norma se sancione, no podrán hacer el negocio que pensaban porque está caduca de pleno derecho aun antes de que sea votada en este recinto. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Venesia. — Señor presidente: simplemente desearé dirigir dos palabras a un amigo, como es el señor diputado Flores, para dejar sentado mi juicio de valor sobre estas cuestiones.

No hay en mi espíritu nada de anárquico; me gusta el orden establecido, el orden de la justicia, pero creo firmemente que en el mundo de los abogados se ha hecho una discriminación tal en este delicado tema de la accidentología y la valoración de las vidas humanas que para mí ha perdido sustento el sistema de valores que se ha establecido. Por tal motivo es que solicitaré autorización para abstenerme en la votación de este artículo 39.

No estoy en absoluto de acuerdo con este sistema. Lo que se va a votar no mejora la situación, aunque tampoco lo precedente sea bueno. En este tema de la accidentología en los seres humanos hubo realmente una gran falta de sentido común en la justicia argentina.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gauna. — Señor presidente: en este debate han sido muchas las palabras vertidas advirtiendo al oficialismo sobre lo peligroso que significa avanzar en este contexto inconstitucional.

Todos sabemos que el gobierno pretendida-mente avanza hacia la transformación argentina.

Dentro de ese concepto de transformación también se ha avanzado fuertemente sobre muchas de las concepciones vigentes. Es posible que la voluntad política que tiene el oficialismo...

—Manifestaciones en las bancas.

Sr. Gauna. — Señor presidente: solicito que se me respete en el uso de la palabra.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Ruego a los señores diputados que hagan silencio y respeten al orador.

Sr. Gauna. — En estas etapas que se consideran de transformación y en las que se avanza sobre posturas que habían sido consolidadas con anterioridad, es probable que se avasallen concepciones vinculadas, por ejemplo, con el derecho del trabajo.

En este sentido, hoy se está concretando —tengo que reiterarlo— un fenomenal retroceso en lo que ha sido la legislación laboral en la Argentina. Más allá de ello, puedo concebir una voluntad de cambio tan fuerte que avasalle la legislación laboral, dándola vuelta como si se tratase de una media.

Sin embargo, todo tiene un límite, que está dado por el pacto de convivencia de los argentinos que es la Constitución Nacional. Entonces, toda transformación tiene que adecuarse a ese marco, que todos hemos aceptado para convivir en la sociedad argentina.

Todos estamos contestes en que se quiere avanzar en una legislación —no sé cómo denominarla— que sea un apéndice del cambio que tanto se proclama. Mi modesta advertencia, señores diputados del oficialismo, es que debe existir el límite del contexto constitucional, porque éste es el pacto de convivencia que hemos votado y jurado todos. Por lo tanto, parece inadmisibles que se quiera avanzar en este texto, que presenta una incontrastable inconstitucionalidad.

Después no queremos soportar las admoniciones del jefe del cambio, que es el señor ministro de Economía. Siempre viene y nos enrostra que somos productores del juicio en la Argentina. Este artículo va a constituir una fuente inagotable de litigios. Por ende, llamo a la cordura. Desde mi postura de hombre de la oposición —en la que me ha colocado el pueblo— acepto todas las transformaciones que se pretenden introducir, entre las que se encuentra dar vuelta como una media los derechos conquistados por los trabajadores. Sin embargo, no acepto que se transgreda la Constitución de los argentinos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: realmente es un buen debate el que estamos manteniendo sobre el artículo 39 del proyecto aprobado en general. He seguido con atención las distintas opiniones, y todas ellas han contribuido a formar un criterio.

Resultan de peso las expresiones que se han vertido sobre esta disposición en el sentido de que puede comprometer la igualdad ante la ley en algunos casos que se han mencionado como ejemplos. Indudablemente, en esos supuestos que se han presentado, este artículo puede correr riesgos de una declaración de inconstitucionalidad por parte de los jueces, pero siempre hay que recordar que ello sólo sería posible en el caso concreto que se presenta y no en la generalidad de las situaciones a las que se refiere el proyecto.

Por consiguiente, si existiera una circunstancia de explosión o de gases tóxicos, podría tener lugar una declaración en favor del derecho del trabajador, pero habría que señalar el aspecto vinculado con la generalidad de la disposición. Un gran legislador argentino, que se ha recordado en estos días, renunció a su banca de diputado —me parece que corría el año 1915— y tuvo algunas palabras de advertencia para sus colegas y también para la mayoría de la Cámara. Les recordó que la ley de accidentes del trabajo estaba en la carpeta de la comisión respectiva y pidió pronto despacho para amparar a la familia del trabajador. Así reemplazaremos —dijo— la arcaica culpa aquiliana por la moderna teoría del riesgo profesional.

Es evidente que en ese momento esa responsabilidad objetiva, esa teoría del riesgo favorable al trabajador iba a estar dentro de un régimen específico que amparaba los derechos de éste. Luego aparecieron modificaciones al régimen de accidentes del trabajo, y también la posibilidad de optar. Así se fue separando el concepto porque evidentemente era favorable la doctrina de la responsabilidad objetiva del trabajador; tenía en su favor precisamente que se invertía el orden de la prueba, que todo era favorable para establecer el riesgo de la cosa y el daño causado por una responsabilidad del empleador. Era conveniente que se optara por esa vía y no por la otra, pero ocurrió precisamente que esta doctrina de la responsabilidad objetiva se fue incorporando al Código Civil y justamente en el fuero civil se fueron acordando mayores posibilidades dinerarias o prestaciones dinerarias —como dice la ley— para la indemnización por causas de accidente de trabajo. Entonces, teniendo el amparo de la misma doctrina en ambos fueros el trabajador iba a tener que optar por aquel

que resultara más generoso a la hora de evaluar la indemnización.

Esto ha sido motivo de análisis de algunos de los oradores que hicieron uso de la palabra en el sentido de que aumentan los asuntos que se ventilan en el fuero civil. Esto significa que la discusión no persigue un tipo de responsabilidad, una doctrina aplicable al trabajador, un régimen objetivo que establezca la doctrina del riesgo empujando, sino un tema de montos en el que la indemnización va a ser más alta o más baja.

Comprendo las palabras del señor diputado Pichetto en cuanto a que este artículo es fundamental para el régimen de la ley. Entiendo perfectamente que esta iniciativa contiene una disposición que de caer, estaría alterando todo el régimen previsto por el proyecto que estamos tratando. Me parece que esto tiene que ser comprendido así como también el tema de apaciguar o morigerar el nivel de costos que tiene la actividad empresarial.

Recuerdo una oportunidad en que, estando de campaña electoral en la provincia de Córdoba, un grupo de trabajadores de distintas actividades de la localidad de Cruz del Eje vino a verme para conversar sobre el tema de accidentes de trabajo. En un primer momento pensé que esos obreros, esos humildes trabajadores, iban a plantearme argumentos como los que se escucharon aquí en contra de este artículo. Pero grande fue mi sorpresa cuando advertí que estas personas venían a plantearme su temor por perder la fuente de trabajo a raíz del drenaje de capitales que provocaba ese régimen amplio en materia de accidentes de trabajo.

También son comprensibles los argumentos que han dado los señores diputados Cauna, Garay y Flores, entre otros, porque son argumentos valederos y tienen su razón; pero también pensemos en esta otra consecuencia que puede significar apartarnos del principio que establece el artículo en discusión, lo cual podría acarrear inconvenientes y obstáculos a la hora de encarar la lucha contra la desocupación, que era el problema que preocupaba a aquellos obreros y trabajadores de Cruz del Eje.

De todas maneras, tenemos que ser muy parsimoniosos al momento de resolver esta cuestión. Propondría incluso que de ser necesario pasáramos a cuarto intermedio. De cualquier modo, no obstante los argumentos que se han esgrimido, al decir este artículo: "Las prestaciones de esta ley eximen..."

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — El señor diputado López le solicita una interrupción por intermedio de esta Presidencia, señor diputado.

Sr. Durañona y Vedia. — La concedo, señor presidente.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. López (A. H.). — Señor presidente; a raíz de lo manifestado por el señor diputado Durañona y Vedia, quisiera preguntar si los trabajadores que a él lo consultaron en Córdoba eran obreros accidentados, sus familiares, u obreros en actividad.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: esa pregunta pareciera un poco distante de todas las expresiones tan llenas de interés que siempre destacan las intervenciones del señor diputado López. Cuando hablamos de un régimen de accidentes del trabajo nos estamos preocupando por los trabajadores en general. Como dijo aquel antiguo legislador que he recordado, "trabajemos por la tranquilidad de los trabajadores y de sus familias".

Nadie está diciendo que éste es un régimen de trabajadores accidentados; estamos instaurando un régimen de accidentes del trabajo, que es la previsión de acontecimientos. Esos trabajadores de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, tenían perfectamente en claro que se trataba de riesgos que podían producirse, que podían sufrir, pero que si esto era motivo de un tratamiento demasiado amplio o demasiado generoso —por decir alguna palabra— podría complicarse la existencia de la empresa y ser dañadas las fuentes de trabajo. Habrán dicho: entre el trabajo permanente de todos —esto es algo seguro que está ocurriendo en la actualidad— y el accidente que pudiera ocurrir, nos parece que tenemos que resolver ambas cosas pero teniendo en cuenta la base fundamental, que es la subsistencia del trabajo.

Como decía, un artículo redactado en esta forma, sin ninguna duda va a dar lugar a la declaración de inconstitucionalidad a la que temen varios señores diputados. Eximir o exonerar de responsabilidad o declarar la extinción de una obligación es algo que puede surgir del contrato o de la ley...

—El señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor José Armando Cao Figuerola, ingresa al recinto —sin ocupar su asiento— y se aproxima a las bancas de algunos señores diputados.

Sra. Piccinini. — ¡Hay un miembro ajeno a la Cámara dentro del recinto!

Sr. González Cabanias. — Lea la Constitución, señora diputada.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — La Presidencia solicita al señor diputado Durañona y Vedia que redondee su exposición.

Sr. Durañona y Vedia. — Voy a redondear, señor presidente, pero me alarman diciendo que hay un miembro ajeno...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: ¿autoriza al señor ministro a estar en el recinto?

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Así es, señor diputado.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: decía que una exoneración de responsabilidad...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — La Presidencia ruega a los señores diputados que guarden silencio y respeten al orador.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: como decía, una exoneración de responsabilidad o extinción de obligaciones puede provenir de un contrato o de una ley, pero en estos casos la ley tiene que especificar de modo concreto en qué consiste la causa de la extinción, de la exoneración. En ese sentido, expresar que las prestaciones de esta ley eximen de responsabilidad constituye una frase ambigua que oscurece el contenido de lo que se quiere determinar y que sin duda acarreará grandes conflictos en la aplicación de este precepto. De manera que, no obstante que estoy conforme con lo expresado por nuestro bloque por intermedio del señor diputado por Córdoba, Germán Kammerath, y ser firmante del dictamen, advierto respecto de esta cuestión porque me parece que a la luz de este debate deberíamos detenernos en este artículo y si fuera necesario —yo lo propongo— tomarnos un tiempo para un análisis más meduloso del asunto.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente, señores diputados: hemos tenido la suerte de participar prácticamente en todos los debates sobre las leyes importantes y trascendentes que esta Cámara ha

votado en los últimos años, y apreciamos que todos tienen algún parecido con la discusión que se está desarrollando en este momento.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reinaldo Pierri.

Sr. Matzkin. — El parecido central es que se trata de normas complejas y difíciles que —como en el día de hoy— en el momento de votar ignorábamos cómo iban a funcionar en el futuro. Nos formulábamos conjeturas, nos llenábamos de conjeturas, hasta nos hartábamos de conjeturas.

Hemos escuchado con mucha atención a los diputados que han hecho uso de la palabra. El bloque Justicialista participó muy poco del debate; recién ahora está interviniendo; antes los miembros informantes muy brevemente han expuesto sobre este punto. Entre las exposiciones hemos escuchado conceptos que nos parecen racionales a pesar de que no los compartimos; hemos escuchado conceptos que estimamos se corresponden con actitudes de buena fe, pero también hemos escuchado apocalípticos conceptos respecto de las siete plagas de Egipto que caerán sobre la Argentina si se sanciona este proyecto de ley. ¡Cuántas veces lo hemos escuchado!

En muchos de los debates sobre las llamadas leyes importantes o trascendentes nos hemos quedado muy solos. En algunas ocasiones muy pocos bloques políticos permanecemos trabajando en este recinto ante numerosas bancas vacías, y en otras oportunidades hemos votado muy solos proyectos de ley que hoy —ex post, como dicen algunos— sabemos han servido a la gente y al país. Incluso ha habido diputados arrepentidos por no haber participado o por lo menos colaborado en la discusión de esas iniciativas.

¿Qué estamos haciendo en el día de hoy? ¿Qué objetivo perseguimos? Y con la posibilidad del error que honestamente reconocemos cuando estamos intentando abrir caminos donde no existen. Estamos buscando un objetivo compartido. Es nuestra visión de la realidad: ¿cómo podemos hacer para conseguir un puesto más de trabajo?

No perseguimos ninguna aspiración distinta y esperamos ser creíbles en nuestra opinión cuando expresamos este tipo de cosas. Más aún, casi a manera de confesión me pregunto cuántas veces los 124 integrantes de la bancada Justicialista inquirirán sobre por qué razón estamos siempre vigentes en el país y seguimos siendo creíbles, ¿cuál es la razón por la que la gente nos acompaña elección tras elección?

¿Porque votamos leyes criticables? No. Mi interpretación de este pedazo de la verdad es que

reconocemos en la realidad una parte sustancial de la verdad. Esta es nuestra verdadera interpretación, porque nos han votado los desocupados, cuando con lo que hemos escuchado decir hoy no hubiéramos obtenido ningún voto. ¿O es que acaso las quejas de muchos señores diputados no salen de este recinto? Efectivamente, muchas no salen de este recinto a juzgar por las realidades de hace muy poco tiempo.

Entonces, ¿cuál es nuestra visión de la realidad frente al problema que hoy tiene la Argentina? Felizmente hemos sido copartícipes de la redacción y defensa de muchas leyes laborales que han buscado la protección del empleado, del obrero, en un régimen de pleno empleo, en un sistema diferente, que nos gustaría, pero que hoy no es tal. De modo que el reconocimiento es hacia la realidad de hoy, de nuestros días, y no de la que quisiéramos.

¡Cuánto nos gustaría subirnos al tren del reparto y pasear por todo el país distribuyendo! ¿A quién no le gustaría? Pero esa no es la realidad de la Argentina de hoy, no es la Argentina del pleno empleo.

Los justicialistas, nuestro gobierno, tiene una responsabilidad y supo consensuar con las fuerzas del trabajo y las empresarias para elaborar este proyecto de ley que ha sido muy discutido y tiene más de 20 o 30 modificaciones —no he terminado de contarlas—, pero posee un nivel de consenso muy amplio brindado sobre todo por la realidad que impera en el país. Es claro que no son las normas que más nos gustan, pero permítanme decirles que no hay peor injusticia que la que comete con aquél que no tiene trabajo. Esa es la verdadera injusticia y es lo que queremos reparar. Por eso estamos proponiendo estas normas.

Ya lo hemos hecho anteriormente. Hemos consensuado la ley de las PYMES, a pesar de que algunos les haya gustado y a otros no. Nosotros creemos que es un instrumento que sirve, que ayuda. También hemos consensuado la ley que modificaba el régimen del contrato de trabajo creando nuevas modalidades contractuales, porque creemos que se trata de un instrumento que también sirve.

Ahora proponemos la sanción de una nueva ley de accidentes de trabajo. Es un concepto distinto. No creemos que se quiten aquí protecciones; las verdaderas protecciones. Es claro que eliminamos un negocio, un asqueroso negocio de empresas que pagaban mucho y accidentados que cobraban poco. Ese negocio no existe más. Ahora la cuestión es mucho más transparente y más cierta.

"Tampoco es cierto que las grandes empresas estén preocupadas por esta iniciativa; de ninguna manera. Quien conoce el paño sabe que esto no es una preocupación. La preocupación es de los miles y miles de pequeñas y medianas empresas argentinas, porque quién no tiene un empresario amigo que no le haya dicho que se niega, que no quiere, que tiene temor de contratar; ese es el empleo de hoy en la Argentina, porque hay una legislación que hoy no sale. Es con esa actitud que no se genera empleo, porque "a ver si el día de mañana tiene la mala suerte de un accidente y se terminó la empresa y el trabajo".

No somos los justicialistas quienes venimos a defender fundamentalmente las empresas. No renunciemos a nuestras banderías, a nuestros compromisos y a nuestras pertenencias. Y la mejor forma de defender todo eso es creando fuentes de trabajo.

Estamos convencidos de que vamos a brindar un instrumento que va a ayudar en las épocas actuales, donde el pleno empleo no existe. Nos gustaría que hubiera pleno empleo, pero ello no es así. Entonces, tenemos que contar con una legislación que establezca políticas de empleo flexibles y con un programa económico que nos posibilite conseguir más puestos de trabajo. Esta es nuestra responsabilidad y por ello el bloque justicialista va a votar afirmativamente este artículo como el resto del proyecto.

No soy un especialista en materia laboral, pero me he informado de que en el mundo prácticamente no existe legislación que en materia civil resuelva los problemas de los trabajadores. Esto está tarfado en todas partes del mundo. No sé si habrá alguna excepción, pero si la hay, será precisamente eso, una excepción. Sólo aquí existía una legislación de esta naturaleza.

Reitero que el bloque Justicialista va a votar afirmativamente este artículo, consciente de que no está quitando ninguna protección sino de que va a otorgar seguridad con un instrumento idóneo para conseguir algún puesto de trabajo más. No sé cuántos. ¿Quién puede saberlo? De lo que sí estamos seguros es de que estaremos brindando un instrumento adecuado. (Aplausos).

Sr. Galván. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia comunica al señor diputado que no puede concederle el uso de la palabra, porque la técnica parlamentaria que siempre se ha utilizado consiste en que cierre el debate el bloque oficialista.

Se ha debatido durante más de una hora y media y no puede ser que el señor diputado haga el cierre de un debate que ha finalizado.

Sr. Polino. — Solicito que la votación se practique en forma nominal.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal formulado por el señor diputado por la Capital está suficientemente apoyado.

—Resalta suficientemente apoyado.

Sr. Galván. — Señor presidente: me obliga a plantear una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Pierri). — Señor diputado: siempre, como en otras instancias, le he dado el uso de la palabra. Pero ahora no corresponde.

Sr. Galván. — [Tengo derecho a réplica]

Sr. Presidente (Pierri). — No se trata de réplicas, señor diputado. El señor diputado Matzkin se anotó para hablar último como representante del bloque mayoritario. Si le diera a usted la palabra, con todo derecho los representantes de los otros bloques podrían hablar para rebatir lo que ha dicho el señor diputado por La Pampa.

El señor diputado sabe que siempre he tratado de ser justo en la conducción de esta Cámara; siempre le he dado la palabra a los distintos diputados que me la han solicitado en la debida oportunidad.

Sr. Galván. — Entonces, pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia le va a ceder la palabra al señor diputado por La Rioja para que efectúe una aclaración, pero no un discurso.

Sr. Galván. — Señor presidente: se trata de una aclaración que pretende abrir el derecho a opinar en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical...

Muchos señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pierri). — Perdóneme, señor diputado, pero existen ciertas reglas de juego que debemos cumplir. La Presidencia le ha concedido el uso de la palabra para que efectúe una aclaración, pero usted no puede romper esas reglas de juego que han sido establecidas por este cuerpo.

Con todo respeto por su posición, la Presidencia le sugiere que haga la aclaración perc

no un discurso que signifique contestar lo que ha dicho el representante del bloque oficialista.

Sr. Galván. — Señor presidente, Honorable Cámara: se comprenderá que el antecedente de estas palabras está precisamente en lo que se dijo antes. Si no hubiera necesidad de hablar en esta oportunidad habríamos desmerecido el discurso del señor diputado Matzkin porque no habría tenido sustento, pero ha dicho cosas que inevitablemente nos llevan a controvertir desde la oposición...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Galván. — Es un bloque mayoritario que noivamente saca a relucir el triunfo del 14 de mayo...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Galván. — ...un bloque mayoritario que precisamente en nombre de esos guarismos quiere aplacar la razón de la oposición...

Sr. Presidente (Pierri). — No es así, señor diputado. Permítame que le diga que si usted se remite al 14 de mayo tendría que dar la palabra al señor diputado Alvarez, y no corresponde. (*Aplausos.*)

Sr. Galván. — Creo que no merezco esa contestación, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — Señor diputado: le di la palabra para que hiciera una aclaración. Le pido por favor que no rompa las reglas históricas que tenemos en esta casa —en otra época usted estuvo del otro lado y lo recordará— por las cuales el cierre del debate siempre lo ha hecho el bloque mayoritario. Le pido entonces que me ayude a resolver esta situación. Hay diputados presentes que estuvieron integrando el cuerpo durante diez años y saben que siempre fue así. Reitero que le di la palabra para una aclaración, pero no para que diga la última palabra contestando las expresiones vertidas por el señor diputado Matzkin.

Sr. Galván. — Muy bien, señor presidente: respetaremos las normas parlamentarias. De todos modos quedan pendientes de consideración algunos artículos que seguramente me van a dar la oportunidad de decir lo que debo decir.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar nominalmente el artículo 39.

Se vota a la votación nominal.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Sobre 170 señores diputados presentes en el recinto, han votado 89 señores diputados por la afirmativa y 69 por la negativa, registrándose además 6 abstenciones. No se ha registrado el voto de 5 señores diputados por no haber hecho uso de sus respectivas llaves.

Votan por la afirmativa los señores diputados Abasto, Abihaggle, Aceñolaza, Alcalá, Alende, Alsogaray, Alvarez (C. R.), Alvarez Echagüe, Arias, Ayala, Balestrini (A. E.), Balestrini (M. A.), Barberá, Baum, Becerra (N. E.), Benzi, Bermúdez, Bianchi Silvestre, Borda, Bracchi, Breser, Callaba, Camaño, Casarí de Alarcía, Castillo (J. L.), Corchuelo Blasco, Crostelli, D'Alessandro, Daud, Díaz Martínez, Donni, Drisaldi, Durafona y Vedía, Durrien, Funes, Gaziá, Giménez (D. A.), Giménez (R. F.), Gioja, Golpe (C. H.), Gómez Centurión, González Cabañas, Granados, Green, Herrera Arias, Ibarbia, Kaehler, Kanmerath, Kessler, Lahoz, Lambert, Larraburu, Leguizamón, López (J. A.), López Arlas, Manfredotti, Maqueda, Martínez (S. V.), Martínez Garbino, Matzkin, Miralles de Romero, Müller, Muniagurria, Nacul, Parada, Pepe, Pérez, Perrini, Pesce, Pichetto, Ré, Rodríguez (M. E.), Rodríguez Sañudo, Rojo, Romero (C. A.), Romero (H. A.), Rubini, Salino, Seelzi, Sebastiani, Soría, Suearín, Tenev, Tolomeo, Tolo, Valcarcel, Varela Cid, Venecia, Zicarelli.

Votan por la negativa los señores diputados Algaba, Alvarez (C. A.), Alvarez García, Antelo, Balestra, Becerra (C. A.), Berhongaray, Bonomi, Carca, Ceballos, Closs, D'Elia, Dal Fabro, Fabbrissin, Fayad, Felgueras, Fernández Meijide, Flores, Fragoso, Galante, Galván, Gama, González Caviola, Guzmán, Hardy, Hernández, Humada, Jaramena, Juncosa, Kelly, Leconte, López (A. H.), Machado, Maidani, Marcos, Martínez (M. L.), Mathov, Mendoza (M.), Mercader, Molinas, Montiel, Moreau, Muñoz, Nieva, Niño, Novau, Orgaz, Ortiz Maldonado, Parola, Pascual, Peláez, Pernasetti, Piccinini, Pinto, Polino, Prat, Rodríguez (J.), Roig, Ruiz Palacios, Sarquiz, Sobrino, Spinoza, Teodosiu, Terragno, Treitel Meyer, Troyano, Vicchi, Viglione, Zuccardi.

Se abstienen de votar los señores diputados Brunelli, García Mereno, González, Ibarreche, Sampietro, Varela.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 40.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Señor presidente: la comisión propone que se agregue como antefúltimo párrafo del apartado 3 el siguiente texto: "En caso de no alcanzarse unanimidad, la materia en

consulta será sometida al arbitraje del presidente de la Nación, quien laudará entre las propuestas elevadas por los sectores representados."

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. López (A. H.). — Señor presidente: además de todas las delegaciones al Poder Ejecutivo, que contempla el proyecto de ley, aquí se habla de la creación del Comité Consultivo Permanente, un organismo tripartito que tiene la función de reglamentar la norma y redactar el listado de enfermedades profesionales. En este aspecto, dicha nómina será cerrada, de forma tal que una enfermedad que no esté incluida no dará derecho a indemnización, cuando en la actualidad, si se puede probar ante la justicia la causa de la enfermedad, el trabajador tiene derecho a ser indemnizado.

El órgano creado por este artículo cuenta con la representación mayoritaria del Poder Ejecutivo, que además es el órgano de decisión, al ser presidido el Comité por el ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

Por otra parte, cuando no haya acuerdo en el Comité se va a someter la decisión al presidente de la República. Cuando no exista unanimidad, la materia en consulta será sometida al arbitraje del presidente de la Nación, quien laudará entre las propuestas elevadas por los sectores representados.

Me parece un absurdo incorporar al presidente de la República esta función, además de la implícita delegación que plantea el artículo, y por eso solicito a la comisión que retire esto agregado.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Zuccardi. — Señor presidente: quiero referirme al punto 1 del artículo 40, donde se habla de la creación del Comité Consultivo Permanente de la LRT, integrado por tres representantes del gobierno, tres de la CGT, tres de las organizaciones de empleadores y presidido por el ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

Como entendemos que al sector de la pequeña y mediana empresa, que tiene sobre sus hombros al 70 por ciento de los puestos de trabajo de nuestra sociedad, le corresponde también un espacio de representación, vamos a solicitar que la redacción del primer párrafo de ese punto sea la siguiente: "Créase el Comité Consultivo Permanente de la LRT, integrado por cuatro representantes del gobierno, cuatro representantes de

la CGT, cuatro representantes de las organizaciones de empleadores, dos de los cuales serán designados por el sector de la pequeña y mediana empresa, y presidido por el ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Nación."

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente; deseo realizar dos observaciones, una formal y otra de fondo. El artículo 40 en su punto 1 crea el Comité Consultivo Permanente de la LRT, integrado por tres representantes del gobierno. Como todos sabemos, el gobierno está constituido por tres poderes. ¿A qué se refiere el artículo cuando habla de gobierno? ¿A representantes del Poder Ejecutivo? ¿A representantes del Poder Legislativo? ¿A un representante por cada uno de los tres poderes? Habría que aclararlo porque seguramente aquí estamos dentro de la confusión de asimilar al Poder Ejecutivo con el gobierno.

La cuestión de fondo es la del agregado propuesto, que debe eliminarse, porque realmente no se entiende que, si se constituye una comisión, se requiera la unanimidad de sus miembros. Esta es una mentalidad totalizadora que emerge de doctrinas que no admiten el disenso o las opiniones minoritarias. Entonces, si no hay unanimidad de criterio va a laudar nada más ni nada menos que el presidente de la República.

Esto va a contramano de la letra y el espíritu de la Constitución reformada, que le quita atribuciones al presidente de la República, muchas de las cuales pasan a formar parte de la competencia del futuro jefe de gabinete. Resulta que inmiscuimos al presidente de la Nación —que debe estar agobiado con la consideración de importantes cuestiones de Estado— para que laude en estas materias cuando no existe unanimidad.

Realmente este agregado no tiene sentido y además está inserto en esa mentalidad de carácter totalizador, que únicamente piensa en la unanimidad y no admite la discrepancia o las opiniones divergentes. Por esta razón pido que se retire la propuesta de agregado, y que se aclare a cuál de los poderes del Estado se refiere la comisión cuando habla de representantes del gobierno.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gauna. — Más que una intervención, quiero aclarar que estoy de acuerdo con el señor

diputado Polino en cuanto a la necesidad de esclarecer quiénes son los representantes del gobierno.

Con respecto al agregado que se propone al artículo 40 —que me parece sin ton ni son—, antes de referirme a él quisiera saber cuál es su soporte argumental y qué antecedentes doctrinarios han llevado a la comisión a proponer esta norma tan extraña.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Voy a contestar integralmente. La comisión acepta la modificación planteada por la señora diputada Zuccardi.

En cuanto a la pregunta del señor diputado Polino, referente a la representación del gobierno, aclaro que puede surgir de los tres poderes, de dos o de uno. Es potestad del gobierno; puede ser el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o el Poder Judicial; será la reglamentación la que lo establezca.

En lo demás, se ratifica en un todo la modificación que ha planteado oportunamente la comisión.

Sr. Gauna. — Señor presidente: insisto en que el señor diputado Borda me dé una explicación del soporte argumental de la nueva norma que se pretende agregar para que dando el presidente de la Nación, ¿Es qué concepto se basa la figura, de dónde sale o surge? Si me pudiera contestar, me podría formar una opinión y votar a conciencia.

Sr. Borda. — Es una figura nueva que se crea.

Parece que nos persigue el fantasma del nombre. Estamos hablando del presidente de la Nación, que hoy es Carlos Saúl Menem y mañana será otro. No veo cuál puede ser el problema.

No entiendo la dramatización que se hace sobre esta cuestión; se trata de una figura nueva. La participación se permite en virtud de la redacción que hemos planteado.

Sr. Polino. — Solicito que la votación de este artículo se efectúe en forma nominal.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 40 con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Gauna. — Solicito que quede constancia del voto negativo de la Unión Cívica Radical.

Sr. Presidente (Pierri). — Así se hará, señor diputado.

En consideración el artículo 41.

Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: el inciso 2 del artículo 41 establece que no es aplicable al régimen de esta ley el artículo 188 de la ley 24.241.

— Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente (Pierri). — Ruego a los señores diputados que guarden silencio y respeten al orador.

Sr. Pernasetti. — Decía, señor presidente, que no se advierte la relación entre las normas citadas, ya que el artículo 188 de la ley 24.241 establece lo siguiente: "En la medida en que aumente la recaudación de los recursos de la seguridad social el Poder Ejecutivo queda facultado para disminuir proporcionalmente la incidencia tributaria sobre el costo laboral, preservando un adecuado financiamiento del sistema previsional."

Solicito a la comisión que aclare cuál es la relación existente entre este artículo y el inciso 2 del artículo bajo análisis.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Borda. — El artículo 188 de la ley 24.241 establece: "En la medida en que aumente la recaudación de los recursos de la seguridad social el Poder Ejecutivo queda facultado para disminuir proporcionalmente la incidencia tributaria sobre el costo laboral, preservando un adecuado financiamiento del sistema previsional." Es simplemente eso; queda excluido expresamente.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: concretamente solicito que se suprima el inciso 2 del artículo 41. En caso de adoptarse este criterio, votaremos favorablemente esta norma.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿La comisión acepta la modificación propuesta?

Sr. Borda. — La comisión no acepta; ratifica el texto de este artículo.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 42.

Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: nos parece innecesario el inciso 2 del artículo 42, que expresa: "La negociación colectiva laboral podrá"

a) Crear Aseguradoras de Riesgo del Trabajo sin fines de lucro, preservando el principio de libre afiliación de los empleadores comprendidos en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo."

Nos parece que esta norma es propia de la ley de convenciones colectivas de trabajo y no de este proyecto. No encontramos la necesidad de establecer condiciones de la negociación colectiva en lo que atañe a la creación de las nuevas empresas que se creen con el régimen general de la norma.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Borda. — No, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 42.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 43.

Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: vamos a votar por la afirmativa, ya que con las aclaraciones y modificaciones que se han introducido al artículo 31 quedaron satisfechas las inquietudes de nuestro bloque.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 43.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 44.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 45.

Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: esta norma implica una verdadera delegación de facultades del Parlamento argentino. No se puede aceptar que se encomiende al Poder Ejecutivo nacional el dictado de normas complementarias en las materias siguientes: desempleo; relaciones laborales de duración determinada y a tiempo parcial; sucesión de siniestros y trabajador jubilado con jubilación postergada.

Se trata de institutos muy especiales en materia de derecho del trabajo, que no pueden estar sujetos a una delegación extraordinaria. Tienen que ser reglamentados por una ley del Congreso de la Nación. La delegación que se efectúa en este artículo es inconstitucional. Por ello la Unión Cívica Radical va a votar por la negativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Zuccardi. — Señor presidente: solicito la eliminación del artículo 45, porque delega en el Poder Ejecutivo de la Nación facultades que son propias de este cuerpo legislativo.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — La comisión no acepta la supresión propuesta y propicia agregar al final del artículo 45 la expresión: "Esta facultad está restringida al dictado de normas complementarias que hagan a la aplicación y cumplimiento de la presente ley."

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — Señor presidente: seguimos en lo mismo. El artículo 45 resulta una aberración porque es inconstitucional. No podemos delegar en el Poder Ejecutivo estas facultades, aunque sea a efectos de la cuestión de los accidentes de trabajo. Existen una serie de institutos nuevos que —como dijo el señor diputado Pernasetti— deben ser legislados mediante una norma totalmente distinta, que debe tratarse en el Congreso. Realmente se están otorgando al Poder Ejecutivo facultades supremas y absolutas. Esto no parece una república, sino una monarquía. Por lo tanto, no podemos aceptar este artículo 45 que constituye una verdadera aberración jurídica y además atenta contra toda lógica.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: si nosotros establecemos que esta facultad es específica en cuanto se refiere al cumplimiento y aplicación de esta ley, dicha facultad quedará acotada para el Poder Ejecutivo en estos temas. No es una facultad para modificar la legislación laboral en general sino en lo que respecta a los temas que faltaría reglamentar o cuando a la aplicación de esta ley. Por eso mantenemos ese agregado.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 45 con la modificación propuesta por la comisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia aclara que, una vez finalizado el tratamiento de esta iniciativa, la Cámara deberá abocarse a la

consideración de tres proyectos cuyos autores son los señores diputados Novati, Manuel Martínez y Fayad.

En consideración el artículo 43.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Señor presidente: en este artículo proponemos sustituir el apartado 1 por el siguiente texto: "Las resoluciones de la Comisión Médica Central serán recurribles por ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. Los recursos podrán ser interpuestos ante los Juzgados Federales en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal y ante los Juzgados Federales con asiento en las provincias, y deberán ser interpuestos y fundados en el término de 30 días hábiles desde la notificación de la resolución administrativa de la Comisión Médica Central.

"Los Juzgados Federales efectuarán el trámite de acuerdo a lo prescripto por los artículos 49.4 y 49.5 de la ley 24.241 y elevarán las actuaciones a la Cámara Federal de la Seguridad Social dentro del término de cinco días hábiles desde la interposición del recurso."

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente: en el texto originario propuesto por la comisión se habían establecido treinta días para interponer el recurso y treinta días para elevar las actuaciones.

De la lectura efectuada por el señor diputado Borda se desprende que se ha modificado el plazo para elevar las actuaciones reduciéndolo de treinta días a cinco; plazo que me parece prudencial y que es perfectamente aceptable. De todos modos considero que continúa siendo exagerado el plazo de treinta días hábiles para interponer y fundar el recurso. Por consiguiente propongo reducir dicho plazo a diez días hábiles, que constituye un plazo prudencial al evitar una prolongación innecesaria del trámite.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Peruzzelli. — Señor presidente: así como se reconoció que el artículo 39 era uno de los pilares del sistema que prevé esta ley, este artículo no es menos importante. Aquí el trabajador sufre quizás los mayores perjuicios porque se lo está condenando al negarle la posibilidad de acceder al servicio de justicia.

Con la modificación que plantea la comisión en cuanto a la posibilidad de apelar las resoluciones de la Comisión Médica Central ante los juzgados federales, no modifica la califica-

ción que tenemos del articulado y de todas las normas referidas a la apelación y a la actuación ante las comisiones médicas.

Este artículo dispone que para la tramitación del recurso será de aplicación lo prescripto en los apartados 4 y 5 del artículo 49 de la ley de jubilaciones y pensiones. Aquí se plantea una contradicción porque esta norma dice que la Comisión Médica Central tiene cuarenta y ocho horas para elevar las actuaciones a la Cámara, que a su vez dispone de cuarenta y cinco días para expedirse, cumpliendo con el siguiente procedimiento: a) vista de diez días al cuerpo médico forense para que dé su opinión sobre el grado de invalidez; b) en casos excepcionales el cuerpo médico puede requerir examinar al afectado y solicitar nuevos estudios; c) producido el dictamen del cuerpo médico se da vista a las partes para que aleguen en cinco días; d) dentro de los diez días la Cámara dicta sentencia. Los honorarios son a cargo del recurrente vencido. Nada dice sobre quién costeará el trámite en esa instancia. Si bien se ha modificado la norma en cuanto a que el trámite ante las comisiones médicas es gratuito, no se dice nada en relación con los procedimientos ante la Cámara Federal.

Quiero ilustrar la situación de un trabajador del interior mediante el siguiente ejemplo.

Un trabajador se accidenta en una mina de mi provincia, Catamarca, como consecuencia de una explosión. Es tratado inmediatamente por el servicio médico de la empresa. El trabajador sufre operaciones. Tiene una incapacidad laboral temporaria de sesenta días. Luego le dan el alta con incapacidad, porque pierde tres dedos. Este trabajador tiene que esperar que la aseguradora de riesgo del trabajo o el empleador —si se trata de una empresa autoasegurada— demuestre el hecho ante una comisión médica. Esta, como sucede en la actualidad, se halla en la provincia de Tucumán. El trabajador va a tener que viajar a Tucumán esperando que le costeen los gastos; irá a la comisión médica para hacerse los estudios y esperará que esa comisión dictamine sobre el grado de incapacidad y aun sobre la naturaleza de la lesión. La comisión médica podrá decir que el trabajador perdió tres dedos, que tiene tal incapacidad y que no hay responsabilidad del empleador porque se trata de un caso de fuerza mayor, o podrá dictaminar en el sentido de que la incapacidad representa un porcentaje que no conviene al trabajador.

¿Qué tiene que hacer el trabajador? Tiene que apelar. ¿Ante quién debe hacerlo? Ante la Comisión Médica Central, que está en Buenos Ai-

res. Tiene que interponer la apelación en sede administrativa, pero la ley no aclara qué es "sede administrativa"; no se sabe si es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o el lugar donde funcionan las comisiones médicas. El trabajador averigua dónde es y luego apela. Viene a Buenos Aires y aquí es revisado nuevamente por la Comisión Médica Central; se le practican nuevos estudios. Supuestamente, se le pagan todos los gastos.

Transcurre mucho tiempo hasta que la Comisión Médica Central ratifica el dictamen anterior. Dado que las apelaciones son con efecto devolutivo, hasta el momento el trabajador no ha recibido ningún beneficio. Como no está de acuerdo con la resolución de la Comisión Médica Central, el trabajador tiene que volver a su provincia y apelar la resolución.

En este punto discrepo con la propuesta formulada por el señor diputado Polino. Los treinta días hábiles son en beneficio del trabajador, para que apele. Lo que nosotros cuestionábamos eran los treinta días que tiene la autoridad administrativa para elevar las actuaciones.

Como decía, continuando con mi ejemplo, el trabajador apela; va a la Cámara Federal de la Seguridad Social, que da vista al cuerpo médico forense. De acuerdo con informes de mis colegas, ese cuerpo no se caracteriza en la Capital por su celeridad.

El trabajador tendrá que esperar el dictamen del cuerpo médico forense y la resolución de la cámara federal para conocer el grado de incapacidad. Hasta ahora no ha cobrado nada. Para cobrar tiene que volver a la provincia o iniciar un procedimiento de conciliación obligatoria —que está tratado en otras normas—, y recién allí tendrá habilitada la vía judicial. Creo que este trabajador hubiera preferido morir en la explosión y no andar con esto peregrinando al cual lo estamos condenando. Esto es grave porque se está dejando sin posibilidad de acceso a la Justicia a los trabajadores del interior, y por eso votaremos por la negativa el artículo en consideración.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: deseo hacer un breve comentario respecto de las expresiones del señor diputado Polino, a quien permanentemente hemos escuchado en este recinto abogando por los derechos del trabajador.

Como ya lo señaló el señor diputado Perna-

mento del interés del trabajador. Los treinta días son para que el trabajador elabore la prueba, consiga elementos médicos y pueda fundar el recurso. En consecuencia, disminuir ese plazo a diez días implicaría lesionar o perjudicar al trabajador, motivo por el cual solicitamos al señor diputado por la Capital que revise su propuesta.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Señor presidente: la comisión no acepta las modificaciones que se han propuesto y ratifica el texto que fue leído oportunamente en nombre de la comisión.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 46.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 47 y 48.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 49.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — Señor presidente: solicito que se elimine el primer párrafo de las disposiciones adicionales, que se refieren a la modificación de la ley 20.744. Más concretamente se sustituye el artículo 75 de la ley 20.744 por un nuevo texto que se redacta en el proyecto.

Consideramos que de este modo volvemos a caer en todo lo que se expresó anteriormente, porque este artículo modifica la Ley de Contrato de Trabajo y se quita la responsabilidad de manos del empleador para pasarla a estas ART. Aquí ya se han analizado todas las dificultades y las implicancias que esto acarreará y que serán totalmente negativas en la aplicación de la norma, sobre todo para el trabajador, como asimismo los inconvenientes administrativos de funcionamiento de este sistema, que luego de sancionada la norma provocarán serios problemas pues no podrán ser puestos en práctica.

Esto se aparta también de lo que establece el Código Civil en sus artículos 1.109 y 1.113, lo que vuelve a crear una situación de inconstitucionalidad porque en el caso del artículo 39 se produce una injusticia, ya que aparentemente habría ciudadanos de distinta categoría y se pierde de vista el principio de igualdad ante la ley que determina el artículo 16 de la Constitución Nacional. En esta oportunidad se va a dar exactamente la misma situación de injusticia en cuanto a la interpretación de este artículo, porque el empleador prácticamente se

desliga de la responsabilidad de velar por la seguridad e higiene del trabajo y por las condiciones que en general se vinculan con la salud del trabajador. En virtud de la inconstitucionalidad de que es objeto pedimos que esta norma sea sustituida.

Por otra parte, quisiera que se me explicara un aspecto que no alcanzo a comprender, porque no sé si se trata de un error de transcripción o de técnica legislativa cuando se alude en la disposición cuarta del artículo 49 a las modificaciones de la ley 24.028, porque en la última parte de este artículo se establece que: "A partir de la vigencia de la presente ley, derógase la ley 24.028, sus normas complementarias y reglamentarias y toda otra norma que se oponga a la presente."

Además, dentro de las "Disposiciones finales" se determina en la expresión "Segunda" que: "El régimen de prestaciones dinerarias previsto en esta ley entrará en vigencia en forma progresiva. Para ello se definirá un cronograma integrado por varias etapas previendo alcanzar el régimen definitivo dentro de los seis años siguientes a partir de la vigencia de esta ley."

Si con la vigencia de este régimen legal se derogan todos los instrumentos jurídicos que regulan el tema del accidente de trabajo con todos sus alcances, me pregunto qué va a ocurrir durante el período de transición, qué va a pasar con todos los casos de siniestros y enfermedades de trabajo y con los demás conflictos laborales y la cantidad de damnificados que habrá a partir de esta sanción. ¿Qué ley les va a dar una solución? ¿Qué organismo oficial se va a ocupar mientras estamos viviendo esta etapa de transición?

Esto es inadmisibles y sugiero que se elimine este artículo o se adopten términos inmediatos, rápidos, para la transitoriedad, porque de lo contrario quedarán por mucho tiempo desprotegidos todos los trabajadores.

Por último, quiero hacer una mención acerca del primer elemento que se analizó en esta sesión con respecto a esta iniciativa. Lo que terminaremos por legislar, más allá de las correcciones y de las mejoras, es una permanente legislación a la braja que beneficia a escasos sectores de la sociedad argentina, perjudica a la mayoría y deja en la nebulosa a muchos, inclusive a los propios empleadores.

Esta iniciativa no soluciona el problema de la desocupación ni el de los altos índices de conflictos judiciales ni el de la crisis que están viviendo las empresas argentinas, sino que atiende los inconvenientes de una minoría que hoy se ha aducado del mundo y del país, que nos

impone las reglas de juego y que es consentida por esta política económica que tiende a beneficiar a unos pocos para solucionar el problema de la deuda externa y para seguir adelante con la succión de fondos que se está haciendo al pueblo argentino. Para lo que va a servir la futura norma —al igual que las AFPJ— es para crear un mercado de capitales y no para poner en marcha la reactivación industrial argentina.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Borda. — Señor presidente: la comisión posteriormente va a solicitar que se reconsidere la votación del artículo 26. Si la Cámara accediera a este pedido, el señor diputado Brunelli va a dar lectura al nuevo texto.

Ahora voy a proponer las modificaciones que ha introducido la comisión al artículo 49.

En primer lugar, en la disposición adicional segunda se debe suprimir el apartado 1. Consecuentemente, el apartado 2 del proyecto pasa a ser el nuevo texto de la primera disposición adicional.

Se suprime la disposición adicional tercera. Consecuentemente, la cuarta pasa a ser tercera, la quinta se convierte en cuarta y la sexta se transforma en la quinta.

En la nueva disposición adicional cuarta —antes era la quinta— vamos a proponer que se reemplace el inciso a) del apartado 1 por el siguiente: "a) Gestionar las prestaciones y demás acciones previstas en la LRT, siendo sujeto, exclusivamente en lo referente a los riesgos del trabajo, de idénticos derechos y obligaciones que las ART, a excepción de la posibilidad de contratar con un beneficiario una renta periódica, de la obligación de tener objeto único y las exigencias de capitales mínimos. En este último caso, serán de aplicación las normas que rigen la actividad aseguradora general. Recibirán además igual tratamiento impositivo que las ART."

En la disposición final primera se debe reemplazar el término "tripartito" por "consultivo"; sustituir la palabra "laborales" por "profesionales"; y, finalmente, agregar como último párrafo el siguiente: "Hasta tanto el Comité Consultivo Permanente se expida, el Poder Ejecutivo nacional se encuentra facultado por única vez y con carácter provisorio a dictar una lista de enfermedades y la tabla de evaluación de incapacidades."

En cuanto a la disposición final segunda, proponemos reemplazar en el apartado 1 la palabra "seis" por "tres". También propiciamos reemplazar el apartado por el siguiente texto: "Durante la primera etapa el régimen de prestaciones dinerarias correspondiente a la incapacidad per-

manente parcial será el siguiente: para el caso en que el porcentaje de incapacidad permanente fuera igual o superior al 50 por ciento e inferior al 66 por ciento y mientras dure la situación de provisionalidad, el damnificado percibirá una prestación de pago mensual cuya cuantía será igual al porcentaje de incapacidad multiplicado por el 55 por ciento del valor mensual del ingreso base, con más las asignaciones familiares correspondientes. Una vez finalizada la etapa de provisionalidad se abonará una renta periódica cuyo monto será igual al porcentaje de incapacidad multiplicado por el 55 por ciento del valor mensual del ingreso base, con más las asignaciones familiares correspondientes. En ningún caso el valor actual esperado de la renta periódica en esta primera etapa podrá ser superior a 55.000 pesos. Este límite se elevará automáticamente a 110.000 pesos, cuando el Comité Consultivo Permanente resuelva el paso de la primera etapa a la siguiente.

"En el caso de que el porcentaje de incapacidad sea inferior al 50 por ciento se abonará una indemnización de pago único cuya cuantía será igual a 43 veces el valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por el coeficiente que resultara de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante.

"Esa suma en ningún caso será superior a la cantidad que resulte de multiplicar 55.000 por el porcentaje de incapacidad."

Además, en la disposición final tercera, apartado 2, debe adecuarse el texto en razón de que la disposición adicional cuarta ha pasado a ser tercera.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Zuccardi. — Señor presidente: la verdad es que en este momento me resulta muy difícil introducir las modificaciones que tenía preparadas sobre el texto original. No obstante, para que la comisión lo piense, quiero expresar alguna sugerencia en relación con la tercera disposición adicional, cuya eliminación proponemos porque consideramos absurdo convertir en delito el incumplimiento del pago de los aportes a las ARP penalizando con dos a seis años de prisión a los pequeños y medianos empresarios. Pienso que deberíamos cambiar esta penalización por un monto pecuniario...

Me acaban de informar que la tercera disposición adicional está eliminada, de modo que primero haré algunas consultas y luego presentaré las propuestas. Mientras tanto quisiera

que la comisión me informara si la quinta cláusula también está eliminada.

Sr. Presidente (Pierri). — Mientras la comisión analiza la respuesta, tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: el artículo 49 que estamos considerando tiene una primera disposición adicional, que es la modificación al artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo. Tal como lo planteó el señor diputado Novati, éste no es un tema menor: creo que constituye la tercera parte de lo que ya hemos tratado.

Con el artículo 39 hemos eliminado la responsabilidad extracontractual; con el que está en consideración eliminamos también la responsabilidad contractual del empleador. Obsérvese que el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo establece la llamada obligación de seguridad, que consiste en la obligación del empleador de observar las normas legales sobre higiene, seguridad, pausa y limitaciones en la jornada laboral, etcétera.

La reforma que se pretende dice lo siguiente: "Los daños que sufra el trabajador como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del apartado anterior, se regirán por las normas que regulan la reparación de los daños provocados por accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales, dando lugar únicamente a las prestaciones en ellas establecidas." Es decir que estamos premiando el incumplimiento de las obligaciones de seguridad e higiene.

El hecho de que el empleador no cumpla con las prestaciones que impone la Ley de Contrato de Trabajo como una obligación contractual o como consecuencia del deber de buena fe con que deben actuar las partes en cualquier contrato constituye un incumplimiento que en materia civil o laboral hoy puede estar reparado integralmente también porque hay culpa por parte del empleador. En cambio, ahora lo limitamos únicamente a las prestaciones de la ley. O sea que no solamente limitamos la responsabilidad extracontractual del empleador sino también la contractual. De este modo estamos convirtiendo a los trabajadores en ciudadanos de "segunda".

Por lo expuesto votaremos en contra de las cláusulas adicionales, aun con las modificaciones propuestas por la comisión.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Zuccardi. — Señor presidente: me informa la comisión que la quinta cláusula del dictamen original se mantiene como está. Allí de-

searíamos sugerir que consideramos que las compañías de seguro que quieran intervenir en el sistema de accidentes de trabajo deben tener este único objeto de su desempeño y no permitir objetos múltiples.

Por lo tanto, solicitamos mantener en el inciso a) del apartado 1 del punto quinto de las disposiciones adicionales, el texto hasta la expresión "LRT", eliminado el resto hasta el punto b), de modo que pueda garantizarse que las compañías de seguro tengan que avenirse a este objeto único.

En el apartado 1 del punto sexto de las disposiciones adicionales, proponemos reemplazar la palabra "aun" por el término "salvo", por lo que el texto sería el siguiente: "Las contingencias que sean puestas en conocimiento del empleador con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley darán derecho únicamente a las prestaciones de la LRT, salvo cuando la contingencia fuera anterior...", y se elimina el texto que sigue hasta el apartado 2. Esto nos permitiría prever la situación que se va a corroborar con las disposiciones finales, fundamentalmente en los apartados 1 y 2 del segundo punto de las disposiciones adicionales, algo sobre lo cual alertábamos cuando fundamentamos nuestro voto en disidencia en el tratamiento en general.

Creemos que la puesta en marcha de este sistema será financiada por las discapacidades laborales adquiridas por la masa de siete millones de trabajadores argentinos. No van a hacer frente a esto las compañías de seguros, tampoco las empresas ni el Estado; tal como está planteado, serán los derechos conculcados de los trabajadores los que van a financiar la puesta en marcha del sistema.

Quisiera sugerir un nuevo apartado en la tercera disposición final, y en tal sentido solicito a la comisión que preste atención a fin de dar curso favorable a esta propuesta. Dicha disposición, que llevará el número 4, diría lo siguiente: "El Poder Ejecutivo dispondrá la implementación de créditos de fácil acceso y devolución a los empleadores de pequeñas y medianas empresas con el objeto de financiar la implementación de los planos de mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo a efectos de permitir la adecuación a las exigencias de la presente ley."

Van a tener que efectuar una gran cantidad de modificaciones para lograr producir efectivas acciones de prevención de accidentes, y por

eso solicitamos que se agregue esta disposición para que desde el Poder Ejecutivo se faciliten los medios para que las pequeñas y medianas empresas puedan adoptar estas previsiones.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Borda. — Señor presidente: esta cuestión ha sido elaborada con la participación de los sectores involucrados; además la reforma contempla ampliamente todos los aspectos y queda la posibilidad de la reglamentación.

En consecuencia, la comisión ratifica el texto, con las modificaciones planteadas por la comisión, y no acepta las modificaciones propuestas por los señores diputados.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 49 con las modificaciones propuestas por la comisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Brunelli. — Pido la palabra para una moción de reconsideración.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una moción de reconsideración tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Brunelli. — Señor presidente: queremos plantear una moción de reconsideración del artículo 26 para modificar su acápite 5, de modo que comience diciendo: "El capital mínimo necesario para la constitución de una ART será de tres millones de pesos (\$ 3.000.0000)..."

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración la moción de reconsideración.

Se va a votar.

Se requieren las dos terceras partes de los votos emitidos.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración nuevamente el artículo 26.

Se va a votar con la modificación propuesta por el señor diputado por Buenos Aires.

— Resulta afirmativa.

— El artículo 50 es de forma.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda sancionado el proyecto de ley¹.

Se comunicará al Honorable Senado.

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 1692.)